

Provincia de Río Negro
Consejo Federal de Inversiones

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
“RESERVA FAUNÍSTICA PUNTA BERMEJA”

INFORME FINAL
ANEXO 2. MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE MANEJO

Consultor:


Lic. Maricel Giaccardi
Socio Gerente
Terramoena S.R.L.


terramoena
GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

MAYO, 2022

INDICE

1	Marco general	3
1.1	Normas preexistentes	3
1.2	Normas complementarias	5
2	Criterios y normas necesarias para el PM.....	6
2.1	Directrices generales para la gobernanza.....	7
2.1.1	Directrices para jerarquizar y fortalecer	7
2.1.2	Directrices para coordinar y dar participación.....	7
2.1.3	Directrices para protocolizar	8
2.1.4	Comentarios e interpretación	8
3	Medidas reglamentarias unidas a la aplicación del Plan de Manejo....	17
3.1	Normas generales sobre Punta Bermeja	18
3.2	Normas particulares para el manejo	19
3.2.1	Para la protección del suelo	19
3.2.2	Para la protección del agua.....	22
3.2.3	Para la protección de la flora y la vegetación	24
3.2.4	Para la protección de la fauna.....	25
3.2.5	Para la introducción y el manejo de mascotas en el ANP.....	29
3.2.6	Para la navegación	31
3.2.7	Para la protección de los recursos culturales	32
3.2.8	Para el uso de los predios rurales de propiedad privada	33
3.2.9	Para la pesca en general	34
3.2.10	Para el uso turístico y recreativo	35
3.2.11	Para la investigación	43
3.2.12	Para la instalación y el funcionamiento de la infraestructura y equipamiento.....	44
3.2.13	Para la villa turística de la lobería.....	46
3.2.14	Sanciones	48
3.2.15	Para la seguridad de las personas	49

1 MARCO GENERAL

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), recomienda que las ANP dispongan de plan de manejo y de un estatus jurídico suficiente que le otorgue la fuerza legal necesaria para su ejecución.

La autoridad encargada del manejo de las ANP debe tener debidamente constituidas sus facultades para poder ejercer con eficiencia sus funciones. Por eso es necesario hacer un análisis específico sobre el tema y plantear recomendaciones oportunas.

El fin de esta sección es reforzar los contenidos de la planificación orientando a la autoridad para que considere la conveniencia de integrar a su marco normativo reglas duras de derecho que faciliten la gestión del ANP. El marco normativo propuesto, sumándose al marco preexistente, podría ser esencial para el éxito de los objetivos.

Un plan de manejo aprobado es un componente base desde el que se constituye la autoridad de un ANP, ejerce sus atribuciones, toma medidas y asume sus responsabilidades con miras a alcanzar las metas establecidas. El estatus jurídico que acompaña a la ejecución del PM define las responsabilidades y atribuciones incluyendo la potestad de promover, regular, prohibir o sancionar determinadas actividades. El efecto jurídico conferido al PM da lugar a que sea visibilizado por otros sectores y niveles del gobierno, lo reconozcan, respeten y armonicen sus políticas y acciones.

En un PM hay temáticas que no se orientan necesariamente mediante disposiciones reglamentarias (p. ej. educación, investigación, monitoreo, interpretación, etc.). Otras, por el contrario, requieren desarrollar reglas de conducta y procedimientos de contenido y carácter reglamentario (prohibiciones, control de actividades, seguridad, infracciones, etc.) ya sea para toda el ANP o para zonas específicas. Por estas razones es imprescindible unir el PM a su estatus jurídico de aplicación y lograr suficiente solidez en previsión de cualquier examen judicial (Lausche, 2012).

Primariamente, el marco normativo debe permitir a las autoridades pertinentes tomar las medidas que permitan hacer cumplir las decisiones y disposiciones aplicables.

1.1 NORMAS PREEXISTENTES

Creación: Decreto Provincial N° 898 del 10/12/1971 denominándola Reserva Faunística Provincial Punta Bermeja.

Objeto primario (art. 1º): protección del apostadero de lobos marinos de un pelo.

Otros objetivos (art. 4º): “conservar y proteger en ella a la naturaleza en todos los aspectos, haciéndola accesible al hombre con fines científicos y/o turísticos”.

Criterios para la aplicación: necesaria coordinación entre la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Dirección General de Turismo, la Comisión Municipal de Turismo de Viedma y el Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia (art. 5º) debiendo dichos organismos dictar “las normas a las que deberán ajustarse la entrada, permanencia y actividades dentro de la Reserva” (art. 6º).

Creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas: Ley 2669 (BO del 02-09-1993).

El sistema integra a las áreas establecidas con anterioridad a la aprobación de la ley (artículo 41).

Solapamiento de competencias: el art. 4º de la Ley 2669 del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, segundo párrafo menciona: “Cuando concurren diferentes competencias en razón de leyes específicas sobre un Área Protegida, la Autoridad de Aplicación de la presente establece las pautas de uso racional y sostenido de los recursos, conviniendo con las otras autoridades de aplicación, las modalidades de implementación de cada norma definiendo los ámbitos de acción que correspondan”.

Determinación de límites: el Decreto Provincial N° 1862 de fecha 30/12/2005, fija los límites provisorios del Área Natural protegida Punta Bermeja.

Plan de Manejo: Decreto Provincial N° 1280/2011

Manejo urbanístico: el Plan de Manejo aprobado por Decreto Provincial N° 1280/2011 incluye un anexo con las “Pautas de manejo urbanístico del Balneario La Lobería”. En su Capítulo 8 (denominado “Aplicación”) son relevantes los artículos 26 y 27.

Ley de Costas: la Ley N° 2951 instituye el marco regulatorio para la utilización, protección y aprovechamiento de la zona costera de la Provincia de Río Negro, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Turismo de la Provincia.

Ley de Desarrollo Sustentable: la Ley N° 2631 declara de interés social y económico a los principios que sustentan el denominado “Desarrollo Sustentable” que consagra una batería de Principios Ambientales, entre ellos el principio precautorio. Tiene por objeto -entre otros- respetar el medio ambiente, integrando las consideraciones

ecológicas con las productivas en la toma de decisiones, el ordenamiento territorial, la planificación de los procesos de urbanización, el poblamiento, el desarrollo turístico en función de los valores del ambiente, la protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de la vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, la prevención y control de factores, procesos, actividades o componentes del medio que ocasionan o puedan ocasionar degradación al ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos, etc. Su artículo 17 señala “Del medio ambiente: Será responsabilidad de las firmas o entidades que ocasionaren modificaciones naturales del medio ambiente y que signifiquen alteraciones en los receptores -hombre, animal, vegetal, bienes- volver al uso fijado, quedando estas acciones a su costo y sujetas a la reglamentación”. El artículo 23 exige que todo emprendimiento u obra que, por su envergadura o característica, potencialmente pueda alterar el ambiente, cuente ante la autoridad competente con la declaración de impacto ambiental que habilitará su ejecución.

1.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Para la RFPB, el Plan de Manejo y otras normas provinciales operan concurrentemente dentro del marco legal preestablecido. Las normas municipales aplicables, como lo es el Código de Ordenamiento Urbano de la municipalidad de Viedma sólo podrían ser más restrictivas, pero nunca más permisivas que lo establecido por el marco general señalado, según surge del principio de complementariedad consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional (CN) y de la autonomía municipal según los artículos 123 CN y 225 de la Constitución de la Provincia de Río Negro. Sin duda alguna, el nivel jurídico superior fijó un piso, quedando abierta la intervención del nivel inferior para atender a su especialidad y los detalles más precisos, en tanto no se alteren las directrices propias del ANP.

Dadas las complejidades que surgen de la convergencia de las múltiples competencias, sin perjuicio de la intervención primaria de parte de la autoridad ambiental responsable de la RFPB y para evitar la fragmentación de las decisiones entre distintos sectores estatales, se requiere conformar sistemas de coordinación intra e intersistemas normativos, es decir para la aplicación efectiva de las normas.

A la complejidad del ejercicio de las competencias anteriores se suele agregar la derivada de los efectos de los derechos de propiedad de particulares, que podrían verse comprometidos o bien ser ejercidos más allá de los límites legales y reglamentarios.

Sobre la RFPB la autoridad de aplicación ambiental ejerce una competencia obligatoria o forzosa, que no puede ser evadida. Es un área sustantiva e insoslayable dentro del Poder Ejecutivo provincial a los fines de la consecución de objetivos establecidos en

leyes de gran importancia social, respaldadas en las leyes de principios mínimos ambientales nacionales y en los convenios suscriptos por la nación argentina, cuyo ejercicio en materia ambiental solo puede caberle a la entidad provincial como responsable constitucionalmente reconocida de sus recursos naturales y de su ambiente.

Algunas competencias no son sencillas de deslindar, por tratarse de temas concurrentes, en tales casos se requiere la coordinación voluntaria guiada por una racionalidad positiva tendiente a lograr respuestas integradas superadoras, que oscilarán entre lo transaccional (producto de la negociación) y lo innovador (producto de la sinergia conjunta). Significa que convivirán las competencias irrenunciables o exclusivas con otras compartidas o concurrentes.

Un ejemplo práctico sobre lo descripto más arriba en la RFPB surge de la lectura del artículo 21 de la ley 2669, cuyo texto expresa: “i) Autorizar, controlar y regular, con acuerdo de los municipios competentes la urbanización de las áreas protegidas y zonas de amortiguación, cuyo manejo lo requiera”. En el párrafo aparece tanto la relación vertical con las responsabilidades ambientales en cabeza de la autoridad ambiental como una relación más horizontal asociada a la especialidad, que proviene de la competencia municipal.

Más explícito aún resulta el Anexo 1º Cap. III Pto.10.3.2 del Plan de Manejo de la RFPB (Pautas de Manejo Urbanístico), que en su capítulo 8, art. 26 expone la jerarquía legal y en el art. 27 indica: *“Las directrices y demás prescripciones contenidas en este Anexo del Plan de Manejo serán de aplicación directa, sin perjuicio de implementarse futuras disposiciones municipales más restrictivas y complementarias. Asimismo servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones urbanístico – ambientales que puedan suscitarse en la aplicación de sus disposiciones.”*

2 CRITERIOS Y NORMAS NECESARIAS PARA EL PM

La adopción de las normas necesarias para que la gestión del PM cuente con los instrumentos jurídicos adecuados, en cualquiera de sus niveles, tiende a construir un escenario favorable en el que intervenir sobre los ámbitos político, funcional y económico/financiero.

Con ese fin se proponen las siguientes directrices generales y medidas reglamentarias generales y particulares/específicas, que podrán considerarse como un contenido mínimo sobre el cual avanzar posteriormente elaborando nuevas herramientas legales. Desde una consideración puramente técnica muchas de ellas pueden ser asumidas

literalmente o con pequeñas modificaciones, porque son habituales en los marcos normativos de muchas otras ANP del país.

2.1 DIRECTRICES GENERALES PARA LA GOBERNANZA

2.1.1 *Directrices para jerarquizar y fortalecer*

1. Jerarquizar a la autoridad de aplicación en su ejercicio intragubernamental y operacional sobre el territorio bajo su responsabilidad.
2. Integrar la política de la ley marco de ANP en las políticas sectoriales cuando comprendan su aplicación sobre el territorio del ANP. El manejo de las políticas especiales (costas, pesca, agricultura, ganadería, infraestructura) en su aplicación dentro del espacio geográfico del ANP no puede regirse por decisiones fragmentadas sino integrarse forzosamente con la política de conservación de las ANP, con intensidad diferenciada según la sensibilidad de los temas.
3. Crear y fortalecer áreas técnicas especializadas dedicadas a atender al ANP o a grupos de áreas homogéneas, evitándose la intervención profesional indistinta sobre todo el sistema, cuando la biodiversidad y los problemas pueden ser profundamente disímiles.
4. Fortalecer el desempeño de los agentes públicos en la fiscalización y protección del patrimonio y de los visitantes al ANP, dotándolos de sistemas y de equipamiento adecuados.
5. Jerarquizar al funcionario designado como “delegado de la autoridad de aplicación” a cargo de la unidad de conservación RFPB.
6. Exigir en virtud del principio precautorio, que toda obra o decisión de envergadura significativa, individual o sectorial, que pueda afectar a los valores del ANP, cumpla con una evaluación ambiental (específica o prospectiva/estratégica) y la respectiva declaración de impacto.
7. Actualizar tecnológicamente el sistema operativo (incorporando videomonitoreo con cámaras de alta resolución sobre costa y villa turística, control centralizado y comunicaciones), para ordenar estratégicamente actividades y procesos.
8. Crear y/o fomentar instancias activas y dinámicas público-privadas de participación con propietarios privados rurales y moradores de la villa turística.

2.1.2 *Directrices para coordinar y dar participación*

9. Establecer la Autoridad Local de Conservación encabezada según la Ley 2.669, art. 24 por el delegado de la autoridad de aplicación (el responsable de la RFPB) convocando a las entidades y personas que correspondan.

10. Reasumir el control primario directo del proceso de urbanización, con intervención del municipio, en orden jerárquico, descentralización y delegando sólo parcialmente funciones hacia la instancia inferior, en el marco del Plan de Manejo (PM) y del Código de Ordenamiento territorial, reservando para la autoridad ambiental la capacidad plena de paralización y sanción de las actividades irregulares como apertura de calles, inicio de obras y la operación indebida de maquinaria, en primera instancia en cabeza de los agentes del ANP.
11. Crear ámbitos de colaboración voluntaria horizontal interinstitucional anual para la elaboración de Planes Operativos Anuales (POAs), en donde los agentes públicos -siempre dentro del marco del Plan de Manejo- definan las acciones a realizar ante el escenario inmediato y el *modus operandi* individual y conjunto quedando comprometidos para la ejecución posterior, dentro de los límites presupuestarios y políticos.

2.1.3 Directrices para protocolizar

12. Protocolizar detalladamente la gestión intragubernamental, interministerial y con el municipio de la ciudad de Viedma, para producir respuestas oportunas según escenarios y previsiones preestablecidas.
13. Protocolizar las gestiones en los ámbitos de coordinación, como comisiones, comités, consejos, o entes integrados, sus procesos administrativos y el tratamiento de los informes (vinculantes, no vinculantes, obligatorios, facultativos).
14. Establecer protocolos de actuación interna e interinstitucional que definan qué tipo de intervención (tareas) deben cumplir los agentes presentes y cada institución ante eventos previsibles de conflicto social con los administrados (transgresiones, daños, inconductas, etc.).¹
15. Establecer protocolos de actuación ante situaciones de riesgo, con los roles preestablecidos para los agentes presentes para la prevención, mitigación y atención de las consecuencias al momento de desencadenarse un evento o accidente.

2.1.4 Comentarios e interpretación

En cada materia de las múltiples que hacen a la gestión del ANP como socio ecosistema, el mandato de *integración* conlleva completar la planificación del ANP en diversos grados de concentración/dispersión. ¿Quién decide? ¿qué se decide? ¿Cómo decide? Cada vía decisoria podría ser diferente por ejemplo en la intensidad de la intervención de la autoridad ambiental y en lo vinculante que se exija de ella.

¹ Las hipótesis de crisis pueden ser previstas fácilmente para un ANP como Punta Bermeja: se trata de una cantidad finita de posibles situaciones esperables que se repiten con frecuencia.

La atomización en decisiones sectoriales contrariaría a cualquier enfoque ecosistémico², por eso toda decisión que lo amerite debe integrar a la autoridad de aplicación del ANP.

La regla de *compatibilidad*, justificante de la *integración*, pone límites a las autoridades ambientales, al no poder excederse de sus competencias y de las particularidades del PM.

Sin duda, en materia de protección de la lobería, del ambiente marino del que se nutre, del paisaje marino-costero en conjunto, de las geoformas predominantes (dunas y acantilados) y de los relictos de monte, entre otros valores, las intervenciones tendientes a la *integración* deben ser perfeccionadas desde la situación actual hacia una gestión mucho más efectiva, en materia normativa y en su correlato ejecutivo.

Considerando amenazas y riesgos, si bien la legislación marco no otorga literalmente esa función al sistema, lo hace a los guardas ambientales en el art. 27 de la ley 2669 porque deben: “c) Ejercer tareas de seguridad, control y vigilancia en el ámbito geográfico de las unidades de conservación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas”. Está implícito que la primera de las funciones de seguridad es la protección de la vida humana. En ese sentido desarrollar protocolos es una necesidad imperativa³.

Con respecto al *principio de no interferencia* de los niveles jurídicos inferiores respecto de los superiores, uno de los desvíos citados en el segmento descriptivo del estado actual del ANP que opera en detrimento del interés específico de conservación de la naturaleza (objeto de la creación de la RFPB) es el modo en que se coordinan las competencias con el municipio de Viedma.

En este caso no se percibió a través de las múltiples entrevistas ninguna pretensión de predominio particular ni conflicto con las autoridades municipales, sino tres debilidades que operan concurrentemente:

- a) Deficiencias en algunas normas de urbanización, con incongruencias sobre la visión del territorio y la función de villa turística⁴, y
- b) Desatención de la autoridad ambiental del ANP a la fiscalización indelegable que emana de las competencias de Ley 2.669.

² Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004). ENFOQUE POR ECOSISTEMAS, 50 p. (Directrices del CDB) <https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-es.pdf>

³ Dado el alto nivel de riesgo presente según lo observable en playas y acantilados.

⁴ El código aparece impropriadamente muy urbano para un área protegida, con omisiones sobre características a las que debiera remitirse. A ello se agrega que ha sido desbordado por edificaciones y obras indebidas y que posibilita progresivas ampliaciones de la trama urbana sobre el territorio.

- c) Ausencia de sanciones reales y en algunos casos ejemplares, en cualquiera de los dos niveles de competencia.

La Ley 2.669 en su Título VI (Régimen Sancionatorio y Acciones Legales) da lugar a la potestad sancionatoria de la autoridad de aplicación de esa misma ley. Para su aplicación ante transgresiones se configura naturalmente una cadena de responsabilidades, que comienza con la constatación de desvíos/transgresiones sobre el terreno, que pueden manifestarse dentro o fuera de los límites de la villa turística.

Si en el pasado fueron constatadas transgresiones, ya sea a la visión o las reglamentaciones aplicables, restaría verificar cómo se procedió posteriormente. Las respuestas a las consultas realizadas manifiestan menos incompatibilidades -conflictos de competencias- que inhabilidades para encontrar mecanismos de cooperación, porque se generaron inhibiciones mutuas entre las dos instancias gubernamentales intervinientes.

Dicho lo anterior, en base a la experiencia y aprendizaje acumulados, los problemas de la cooperación vertical actual podrían ser superados ensamblando mejor los aportes de la autoridad ambiental del ANP y de la autoridad municipal. Escapa a este debate aquí si se trata de una cooperación vertical u horizontal, lo clave es diseñar una modalidad de intervención que haga eficaz y eficiente al Estado para lograr sus fines.

Dos ejemplos pueden clarificar: ¿Quién debería primariamente intervenir?

- Ante una ocupación indebida fuera de los límites de la villa de la Lobería.
- Ante un movimiento de suelos y un desmonte dentro de la villa.

La respuesta en ambos casos es que son los agentes del estado responsables de la protección del patrimonio ambiental, presentes en el ANP, quienes están obligados a intervenir para constatar fehacientemente según las normas vigentes la existencia de autorizaciones y eventualmente paralizar todo avance para interrumpir el daño.

En otro orden, cuando se trata de decisiones gubernamentales sectoriales, en cualquier nivel, la intervención de la autoridad ambiental del ANP debería ser siempre preventiva, obligatoria y vinculante, bajo advertencia de nulidad. De lo contrario, no podría cumplirse con el mandato legislativo y con el direccionamiento del desarrollo del ANP.

Lo mismo sucede ante decisiones privadas sobre ocupar territorio, fraccionarlo, construir, mover suelos y cambiar pendientes, cuando no se presentan previamente las debidas autorizaciones ante los agentes públicos instalados en el lugar. En ambos

ejemplos, la falta de intervención lleva a la acumulación sucesiva de desvíos y a conformar situaciones de hecho, degradatorias del objeto de la RFPB.

Si la ausencia de reacción estatal oportuna persiste, la anomia producirá un vacío que en poco tiempo llevará las condiciones ambientales del territorio del ANP, en parte o en todo, a ser una “reserva de papel”⁵ o a motivar un fenómeno PADDD⁶.

La conformación de instancias apropiadas de gestión puede alcanzarse mediante diferentes instrumentos legales, quizá la forma más integral y efectiva podría ser a través de una ley complementaria o de una modificación de la ley marco 2.669, disponiendo los principios aludidos y concentrando procesalmente las decisiones sectoriales en la Autoridad de Aplicación, previa consulta a los sectores implicados, o bien mediante Decreto.

2.1.4.1 Gobernanza

Las definiciones de este término varían⁷. Para la Comisión Europea se trata de las reglas, procesos y conductas que afectan el modo como se ejerce el poder, particularmente en lo que se refiere a la apertura, la participación, la responsabilidad, la efectividad y la coherencia (Comisión Europea, 2001). También se habla de “Buena gobernanza” aunque para muchos autores se trata de una redundancia. Se la define reuniendo los conceptos de derechos humanos, democratización y democracia, supremacía del derecho, sociedad civil, descentralización con vistas a compartir el poder, y buena administración pública evolucionando en la Sociedad hacia sistemas políticos más sofisticados que migran de la gobernanza a secas hacia una mejor gobernanza (Comisión Europea, 2003). Es el sistema de valores, políticas e instituciones a través de los cuales una sociedad maneja sus asuntos económicos, políticos y sociales en las interacciones dentro de y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Trata acerca de cómo se organiza una sociedad para tomar y aplicar decisiones mediante la comprensión mutua y cuáles son los procesos que permiten a los ciudadanos y grupos articular sus intereses, negociar sus diferencias, y ejercer sus derechos y obligaciones (PNUD, 2007).

Para Graham et al. (2003) gobernanza son “las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. El proceso de comprender la gobernanza y, donde sea necesario, de mejorarla,

⁵ El INFORME PLANETA PROTEGIDO 2020: LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Seguimiento del progreso hacia las metas globales para las áreas protegidas en Latinoamérica y el Caribe (Álvarez Malvido et al., 2021) dice que se ha alcanzado cerca de un 19% del territorio marino y costero de la región, pero persisten muchas áreas insuficientemente implementadas.

⁶ Desvalorización, disminución de categoría o de superficie de áreas protegidas.

⁷ Las citas de este párrafo no figuran en la bibliografía, sino en Lausche (2012 p. 46)

se constituye en la espina dorsal de la conservación efectiva (Borrini-Feyerabend et al., 2014).

Gestión y gobernanza no son lo mismo, tal cual se puede interpretar en la siguiente figura.

Figura N° 1. Comparación entre los conceptos de gestión y gobernanza
Fuente: modificado de Borrini-Feyerabend et al. (2014)

Gestión	...consiste en...	Lo que se hace en procura de unos objetivos dados Los medios y las acciones para lograr tales objetivos
Gobernanza	...consiste en...	Quién decide cuáles son los objetivos, qué hacer para alcanzarlos y con qué medios Cómo se toman las decisiones Quién detenta el poder, la autoridad y la responsabilidad Quién debe (o debería) rendir cuentas

Para Borrini-Feyerabend et al. (2014) los conceptos clave que hacen a la gobernanza son: participación de los actores, innovación, respeto, distribución de los beneficios, consentimiento libre, previo e informado (si correspondiere) y aplicación de los principios de buena gobernanza tales como respeto por los derechos y la aplicación de la ley, promoción del diálogo constructivo y del acceso justo a la información, responsabilidad en la toma de decisiones, y existencia de instituciones y procedimientos para la justa resolución de conflictos.

Aplicado al objeto institucional, proceso y perfil decisorio son condicionantes clave para la RFPB cuya aplicación implica hacer reconsideraciones acerca de competencias y procedimientos, coordinación horizontal y vertical, y modos de vinculación con la sociedad.

2.1.4.2 Autoridad de aplicación del ANP

Para la UICN las responsabilidades de los sistemas de áreas protegidas deben recaer en autoridades políticas gubernamentales situadas en un alto nivel, para que puedan interactuar como pares o superiores dentro de la red gubernamental.

El Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), ratificado por ley por Argentina y plenamente válido en todo su territorio, comprometió en sus Metas de Aichi (COP10) a la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas "(...) a través de sistemas de áreas protegidas administradas de manera *eficaz y equitativa*,

ecológicamente representativas y bien conectadas y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas o territorios”.

Los modelos pueden ser muchos, pero para lograr eficacia y equidad es harto relevante considerar el perfil de la autoridad del sistema y asimismo el perfil de la autoridad que se constituye en el territorio del ANP.

Para seleccionar el perfil de la autoridad encargada de gestionar el área, debe asumirse que:

- Importantes programas y metas recaen bajo su responsabilidad.
- Un sinnúmero de procedimientos formales e informales deben ser ejecutados para integrar políticas de conservación del ANP con políticas sectoriales, mediante coordinación.
- La organización local, los servicios y la fiscalización, atinentes a la gestión, se amalgaman con los dos elementos anteriores para dimensionar la autoridad real.

La autoridad del sistema de ANP proviene de los artículos 20, 21 y otros de la ley 2.669. La autoridad local del ANP se constituye según lo que prevé el Capítulo 3 de la ley 2.669 (artículos 22, 23 y 24): “Las Autoridades Locales, tienen carácter deliberativo y de asesoramiento; son presididas por el delegado de la Autoridad de Aplicación que se encuentre al frente de la Unidad de Conservación que las involucre (...)”.

Para que las dos autoridades de aplicación del sistema (provincial y local) puedan coordinar acciones con otros sectores del estado provincial, deben hallarse suficientemente jerarquizadas, porque deben interactuar con otros sectores que lo están. Una autoridad de baja jerarquía administrativo-política dentro del escenario gubernamental encontrará impedimentos para establecer negociaciones destinadas a la coordinación de políticas con funcionarios de otras carteras (Pesca, Vialidad, Seguridad, Turismo, etc.).

Esta consideración se enraiza en varios motivos políticos, funcionales y económico/financieros. Ya han sido expuestos varios de los primeros, aquí solo cabría agregar que no podrían ejercerse políticas basadas en principios mínimos ambientales reconocidos a nivel mundial, nacional y provincial, desde un lugar desempoderado, sería contradictorio.

Desde lo funcional, el rango jerárquico implica una posición, un reconocimiento y una concentración de competencias ante otras áreas de gobierno que también tienen competencias sobre el territorio. De no tener ese rango su función se limitaría a dar aviso, registrar las acciones incompatibles y esperar la intervención de terceros por lo que su actuación se vaciaría para ser decorativa o superflua. Por ejemplo, ante las eventuales

transgresiones públicas o privadas dentro de la RFPB, no es lo mismo labrar un acta de constatación que disponer de la potestad de paralización y de sanción.

Desde lo económico/financiero, una autoridad de suficiente rango jerárquico puede acceder a mayores partidas presupuestarias o al menos participar de los ámbitos donde se definen las asignaciones para poder exponer prioridades, demandas y beneficios derivados de las potenciales inversiones.

2.1.4.3 Órganos consultivos

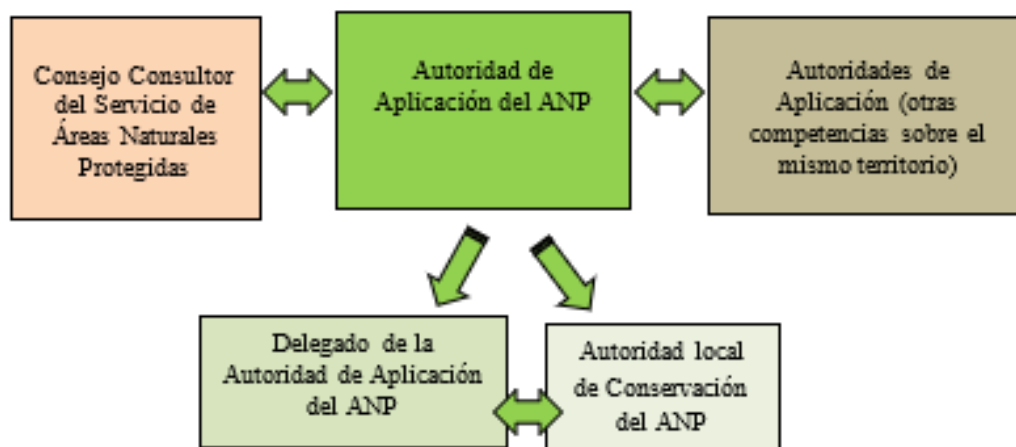
La ley 2669 crea dos ámbitos consultivos de significativa trascendencia.

En el nivel más elevado se determinó la creación del Consejo Consultor del Servicio de Áreas Naturales Protegidas como órgano de asesoramiento del Estado Provincial, constituido por representantes de universidades, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y demás entidades integrantes de la Red Provincial de Recuperación y Conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Tiene una carácter orientativo para la Autoridad de Aplicación.

En su Capítulo 3 (de las autoridades locales) constituido por tres artículos (22 a 24) atribuye a la autoridad de las ANP la potestad de dar lugar a autoridades locales de conservación mediante resolución, integrando a “autoridades municipales, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, centros académicos, universidades, organizaciones intermedias afines con la preservación de la naturaleza y los habitantes de las Unidades de Conservación”.

Esta autoridad local es deliberativa y asesora, puede participar en la elaboración de los planes de manejo de las ANP, proponer metodologías apropiadas para el desarrollo del área de amortiguación externa al espacio geográfico protegido, promover el ecoturismo, el desarrollo de tecnologías sociales y ambientalmente apropiadas, y la conciencia ambientalista, etc.

De la descripción de las autoridades surge lo siguiente:



2.1.4.4 Órganos de coordinación horizontal

Indudablemente, se precisa crear ámbitos y modalidades de coordinación interinstitucional y social, tanto horizontal como vertical. En ese sentido, pueden tener una función consultiva e informativa (una suerte de Consejo de Coordinación de políticas y acciones gubernamentales sobre las ANP), o alcanzar un rango decisorio formalizado.

En lo propositivo las decisiones pueden lograrse mediante actos administrativos individuales concertados, o por actos con firma conjunta, o creando organismos descentralizados con directorios integrados, como sucede con la Administración de Parques Nacionales (ley 22.351). En lo operativo se trata de poder gestionar inteligentemente una agenda común, desde la que proyectar acciones y asignar responsables y medios.

En el rango mayor del Estado provincial, el espacio de coordinación debería reunir a los representantes de las áreas ministeriales competentes, ampliable a las autoridad municipal. En un rango menor, puede ser desarrollado entre la autoridad delegada del ANP y los niveles municipales que lo ameriten, o de otros organismos que incidan sobre el ANP.

2.1.4.5 Órganos de coordinación vertical.

El vínculo entre la autoridad provincial y la municipalidad de Viedma debe ser fortalecido. El marco legal de orden vertical se encuentra perfectamente establecido en las leyes y en el PM. Se precisa tomar decisiones sobre variados temas, algunas en relación de acatamiento (siempre a las leyes provinciales y al plan vigente) y otras como colaboración mutua. Entre estas últimas pueden analizarse las siguientes:

1. Residuos: sistemas de recolección, frecuencias, adopción de mecanismos de gestión ambiental para el desarrollo gradual de sistemas de separación, recolección selectiva, minimización, disposición final apropiada, entre otros.
2. Infraestructura: minimización de la instalación de estructuras e infraestructuras que ofrezcan impactos evitables sobre el ambiente o los valores del ANP.
3. Evaluación de impacto ambiental: cómo apelar a este instrumento predefiniendo condiciones específicas, lineamientos y procedimientos para la aprobación de los proyectos dentro del ANP.
4. Energías Limpias y cambio climático: cómo incorporar energías limpias y tecnologías para disminuir las emisiones y la huella de carbono.

Para evitar discrepancias actuales o futuras, sería recomendable que el Plan de Manejo sea participado al municipio antes de su aprobación y posteriormente pedir que la autoridad legislativa municipal adhiera a sus términos. Este tipo de colaboración, en definitiva, cuando es ejercida en el interés público tiende a potenciar los beneficios comunes.

2.1.4.6 Órgano operativo, autoridad ejecutiva local

En cualquier caso y ante cualquiera de los ámbitos que se analizan, el perfil del delegado del ANP es clave. Para la RFPB se trata de una autoridad no consolidada que resulta en una marcada debilidad. La función actual remite más que nada a tareas de logística y coordinación interna, diluyéndose el resto de las funciones.

En el mundo, la mayoría de las ANP creadas durante el siglo XX fueron identificadas y creadas cuando eran espacios remotos y poco visitados, rodeados de zonas similares poco habitadas y antropizadas (Bahia-de-Aguia et al., 2013; Caruso, 2015). Por lo general el marco regulatorio acompañante se componía con muchas prohibiciones, pero era impreciso acerca de la protección de la biodiversidad y de los servicios ambientales, riesgos y responsabilidades.

Desde una visión retrospectiva, las misiones y funciones para el desarrollo de los servicios gubernamentales responsables de las ANP o sus sistemas integrados se restringían generalmente a la custodia patrimonial, a la constatación de transgresiones y a la verificación de cambios significativos, con cierto poder local de advertencia y disuasión. En las últimas décadas, no sólo ha crecido la accesibilidad a las ANP, sino las presiones de uso, la potencia del equipamiento empleado (lanchas, motores, maquinaria, vehículos terrestres y aéreos, etc.) y el potencial de producir impactos. En las nuevas circunstancias, donde los territorios en general y los territorios protegidos en particular

adquieren mayor complejidad ambiental, crecen paralelamente las responsabilidades de los agentes públicos respecto de los daños sobre ambiente y sobre las personas. Puede tomarse como ejemplo al turismo, actividad que en la RFPB pasó de prácticamente cero visitantes a decenas o cientos de miles por temporada.

No obstante lo anterior, pese al aumento progresivo de personal asignado a la RFPB, la estructura interna existente aparece horizontal, sin una estructuración acorde a las condiciones actuales, ni sujeta a una autoridad empoderada que lidere los procesos integrales que requieren la aplicación del plan de manejo y demás cuestiones operativas diarias.

3 MEDIDAS REGLAMENTARIAS UNIDAS A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

Para el manejo de la RFPB no alcanza con implementar programas de gestión, sino que -como se ha escrito más arriba- deben considerarse contenidos de derecho, pautas específicas para la gestión del área que transfieran el espíritu y letra de las leyes en normas concretas y con ellas -el estatuto jurídico- procurar los resultados. Todas deben estar basadas y ser concordantes con los lineamientos que surgen del PM.

No son necesarias medidas reglamentarias en todos los campos, pero son fundamentales en los aspectos críticos. En ciertos casos sencillamente hay que regular o prohibir actividades, ya sea en toda el ANP o en sectores específicos. Para consultar antecedentes pueden tenerse en cuenta en lo pertinente los cuerpos normativos para áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales⁸ y de otras provincias que los disponen como Chubut y Mendoza.

Este PM promueve la adopción de medidas legales y reglamentarias, con sus complementos procedimentales, destinadas al cumplimiento de su visión y objetivos, desde donde exigir su cumplimiento por vía administrativa o en última instancia, judicial.

A continuación, se enumera un conjunto de medidas reglamentarias y recomendaciones procedimentales clasificadas entre generales y particulares, estas últimas según disciplinas de gestión.

⁸ <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/normativas>; para investigación: https://sib.gob.ar/archivos/Reglamento_Investigacion_APN_2016.pdf; para perros: <https://sib.gob.ar/archivos/perros.pdf>; para impacto ambiental: https://sib.gob.ar/archivos/APN_Reglamento_EIA_2016_completo.pdf; para seguros: <https://www.nahuelhuapi.gov.ar/normativas/prestadores/Reglamento%20de%20seguros.pdf>

3.1 NORMAS GENERALES SOBRE PUNTA BERMEJA

1. Declárase de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos,
2. Declárase de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación del sistema agua, sea marina o continental.
3. Declárase de interés general la protección, conservación y recuperación de la flora y la vegetación autóctona.
4. Declárase de interés general la protección, conservación y recuperación de la fauna.

En la aplicación del presente reglamento, en todas las normas particulares que deriven del mismo y en todas las actividades que se realicen dentro del ANP (incluyendo entre otras ganadería, agricultura, pesca, edificación, recreación y turismo), se considerarán los siguientes PRINCIPIOS RECTORES:

- a. Principio de solidaridad intergeneracional. El proceso de desarrollo económico y social y su vinculación con el patrimonio natural y cultural y los recursos naturales como el suelo, el agua y la flora, la vegetación, la fauna y el ambiente en general, debe cumplirse de tal modo que las futuras generaciones puedan cubrir sus necesidades de manera equitativa con las presentes.
- b. Principio de prevención. Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que puedan producirse sobre el patrimonio natural y cultural, el suelo, el agua, la flora, la vegetación, la fauna y el ambiente en general.
- c. Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del patrimonio natural y cultural, suelo, el agua, flora, vegetación, fauna y ambiente en general.
- d. Principio de responsabilidad. El generador de efectos degradantes actuales o futuros sobre el patrimonio natural y cultural, suelo, agua, la flora, la vegetación, la fauna y el ambiente en general, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
- e. Principio de progresividad. Los objetivos de protección del patrimonio natural y cultural, suelo, agua, flora, vegetación, fauna y ambiente en general, deberán ser logrados en forma gradual para las distintas actividades, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Los objetivos o metas alcanzados no podrán ser desvinculados sino sólo por prueba suficiente de un interés público general relevante.

- f. Principio de integración y prevalencia en la conservación del paisaje y del patrimonio natural y cultural. Se dará prevalencia a la conservación del paisaje que caracteriza a la reserva, a la flora, vegetación, fauna y el recurso agua que sustenta a todos los anteriores, siendo elementos que resultarán prevalentes sobre cualquier otro tipo de decisión sectorial al respecto.
- g. Principio de primacía de la fauna. En todas las disposiciones que se adopten, cualquiera sea su jerarquía las autoridades respetarán el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al ambiente, pero dando en todos los casos primacía a la conservación, como criterio rector de los actos decisorios.
- h. Principio de minimización del impacto sobre el ambiente del ANP. En los espacios del ANP la ejecución de las actividades urbanas, comerciales, turísticas y/o recreativas permitidas deberá darse bajo el presupuesto del menor impacto sobre el ambiente.

3.2 NORMAS PARTICULARES PARA EL MANEJO

3.2.1 Para la protección del suelo

Para la protección del suelo propiamente dicho	
Normativas	1. Aplíquense los principios tendientes al uso y conservación de suelo sobre todo el territorio del ANP conforme los límites establecidos en la ley que aprueba el presente, sin exclusión de espacio alguno, natural, rural o urbano.
	2. Determinase que todo espacio por fuera de los límites establecidos para la actual villa turística de la Lobería dentro de la categoría de uso múltiple permanece como rural, sujeto a las restricciones y condiciones de uso previstos en la zonificación según lo fija el PM correspondiente y en concordancia con las directrices del Código de Ordenamiento Territorial municipal (Art. 77, 78 y 79, Ordenanza N° 8159/2019). ⁹
	3. Prohíbese la circulación con vehículos a campo traviesa en playas, establecimientos rurales y todo el territorio de jurisdicción del ANP, excepto vehículos de trabajo de control y monitoreo o en cumplimiento de actividades autorizadas

⁹ El artículo 78 inciso e) dice textualmente sobre el ANP: "Establecer la condición no urbanizable de estas áreas, salvo situaciones preexistentes compatibles con los objetivos de conservación".

	expresamente, por ejemplo, las rurales y científicas, siempre atendiendo a las buenas prácticas de la actividad a desempeñar y al mínimo impacto admisible.
	4. Restríngese el tránsito vehicular a su circulación por los caminos autorizados y bajo las velocidades y pautas que a los fines ambientales se determinen y comuniquen, además de las que las autoridades competentes establezcan a los fines de la seguridad pública.
	5. Prohíbense las competencias de autos o motos, cualquiera sea su tipo y especie, aún las que organicen la circulación por rutas y caminos. Sólo se permitirá su tránsito a velocidades normales para atravesar el ANP.
Procedimentales	6. La autoridad de aplicación del ANP en coordinación con las autoridades competentes promoverá se complete el relevamiento del estado de los suelos del ANP a una escala de estudio que posibilite el cumplimiento de los objetivos del presente.
	7. La autoridad de aplicación en coordinación con otras autoridades competentes promoverá la realización de planes de conservación del suelo, en base a las recomendaciones que surjan de investigaciones y estudios realizados a efectos de prevenir la desertificación y asegurar la sustentabilidad del recurso suelo, incluyendo sistemas de monitoreo basados en indicadores de sustentabilidad físicos, químicos y biológicos.
<i>Para la limitación de subdivisiones y de toda fragmentación de territorio y del ambiente</i>	
Normativas	8. Prohíbese la subdivisión predial de los establecimientos rurales preexistentes, bajo cualquier forma de fraccionamiento. Si se hubiere constituido condominio éste no habilitará a establecer más construcciones que las necesarias para la administración del predio en su función productiva.
	9. Prohíbese la subdivisión de los inmuebles que se hallen dentro del ejido urbano de la villa de la Lobería, ni en propiedad horizontal ni bajo ninguna modalidad ni circunstancia.
	10. Prohíbese por fuera de los límites establecidos actualmente para la villa de la Lobería la realización de subdivisiones, demarcaciones con esa finalidad, ni realizar ocupaciones o instalar mejoras o bienes muebles de ningún tipo, incluyendo cercos, calles y caminos, salvo los expresamente autorizados por la autoridad de aplicación del ANP. Cualquiera avance o acción tentativa por dentro o fuera del límites urbano preestablecido deberá ser paralizado inmediatamente por los agentes de control, retenidos y/o decomisados los equipamientos y materiales con que se desarrolló el intento.
	11. Establécese que la transgresión a las obligaciones y prohibiciones indicadas en este capítulo y en el PM con relación a la subdivisión y a la fragmentación dará lugar a la nulidad de los derechos que se pretendan y a las sanciones

	previstas en la ley y en el marco de este PM, incluyendo las debidas multas de la ley 2669.
	12. Determinase que la transgresión a las prohibiciones de esta sección, que pudieran haber generado perjuicios y/o daños al ambiente quedará sujeta además al resarcimiento del daño y la obligación de recomponer.
	13. Dispónese que para toda obra particular que incluya movimiento de suelos dentro del ANP y especialmente en la villa de la Lobería, se deberá presentar el proyecto de ocupación, movimiento de suelos y nivel de obra ante la autoridad de aplicación del ANP o en caso de coordinarse debidamente, ante las autoridades municipales, bajo pautas detalladas.
	14. Hácese saber a todos los particulares que deseen iniciar una obra, que deberán presentar en forma previa la habilitación correspondiente ante las oficinas locales del delegado del ANP para que libere su inicio, paralizándose inmediatamente toda obra en la que no se cumpla tal requisito.
Procedimentales	15. La autoridad de aplicación del ANP a través de los organismos y acciones que correspondan, delimitará y amojonará los límites del ejido urbano habilitado para el desarrollo de la villa turística de la Lobería.
<i>Para la protección del subsuelo y ante las actividades mineras</i>	
Normativas	16. Prohíbese la extracción de áridos, incluyendo la arena salvo acuerdo explícito de la autoridad de aplicación con la autoridad vial, previa evaluación de impacto ambiental respecto al sitio que se haya seleccionado para la misma y solo con el objeto de ayudar al mantenimiento de rutas y caminos internos.
	17. Prohíbese toda explotación minera, cualquiera sea su tipología.
	18. Prohíbese toda extracción y remoción de suelo, salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación y bajo las condiciones que a ese efecto se establezcan.
Procedimentales	19. Dispónese que ante todo proyecto que pueda repercutir sobre la protección del suelo deberá darse intervención a la Autoridad de Aplicación de la ley 2669 en forma obligatoria y vinculante, bajo pena de nulidad.
<i>Para el sistema costero y playas</i>	
Normativas	20. Prohíbese en las playas zonificadas como zonas intangibles todo tipo de intervención humana, salvo las que correspondan a la autoridad de aplicación del ANP y las de investigación debidamente autorizadas.
	21. Limitase las actividades dentro de la zona de uso restringido de playas y costas exclusivamente a aquellas que en el apartado de esa zonificación se enumeran y en las condiciones que el presente PM define.

	22. Prohíbese en todas las playas del ANP la circulación con vehículos de cualquier tipo, salvo se encuentre debidamente, justificada y formalmente autorizada.
	23. Establécese que será considerado falta grave el desarrollo de actividades con vehículos en transgresión a esta normativa y a cualquier otra que afecte al sector de costas, médanos y playas derivadas del Plan de Manejo, cuando sean cometidas por permisionarios con actividades fijas dentro del ANP o propietarios titulares de predios sitios en la villa de la Lobería, o sus empleados.
	24. Limitase en las playas de la zona de uso restringido la circulación al modo peatonal, excepto para las autoridades de aplicación y para quienes se encuentren desarrollando actividades permitidas por el presente PM y habilitadas por la autoridad.
	25. Cancélese cualquier permiso en vigencia, en forma transitoria o definitiva, ante transgresiones graves en que sus responsables sean beneficiarios de cualquier tipo de permiso que otorgue derechos dentro del ANP, independientemente de cualquier otra sanción pecuniaria. En caso de reincidencia la restricción a cualquier otro otorgamiento durará por el término de cinco (5) años.

3.2.2 Para la protección del agua

Para la protección del agua en el área marítima	
Normativas	1. Prohíbese en forma general la navegación dentro del sector marítimo del ANP, con excepción de la que se desarrolle en función de las tareas de investigación y de control de la autoridad de aplicación o de seguridad y rescate.
	2. Exíjese que cada embarcación que ingrese al ANP o transite por la misma por cualquier causa cumpla con los máximos requisitos ambientales de prevención que permitan las normas marítimas.
Procedimentales	3. A los efectos de la presente se entenderá por agua marítima al agua comprendida más allá de las líneas de las más altas mareas hacia el océano o ingresando en los golfos.
	4. Ante un siniestro que pudiera provocar contaminación sobre las aguas marítimas la autoridad de aplicación del ANP deberá exigir las correspondientes acciones de recomposición y eventualmente se encuentra legitimada para solicitar las mismas ante la justicia conforme artículo 30 de la ley nacional N° 25.675
	5. Conforme lo previsto en ley federal de pesca N° 24.292 y normas concordantes (leyes 22.190 y 21.947 y demás) y la ley de navegación N° 20094, ante

	<p>cualquier contingencia ambiental dentro de los límites del ANP, la intervención de la Prefectura Naval Argentina deberá darse de manera coordinada con la Autoridad de Aplicación del ANP.</p>
	<p>6. Se deberá coordinar con la autoridad de aplicación marítima los procedimientos a aplicar ante derrames y vuelcos de residuos provenientes de embarcaciones dentro del espacio protegido.</p>
	<p>7. Se deberá evaluar con la autoridad marítima la posibilidad de declarar al AP como zona especial</p>
Para la protección de las aguas continentales	
Normativas	<p>8. Establécese que en caso de comprobarse alteración relevante sobre el sistema agua del ANP, su responsable causal deberá hacerse cargo de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de cualquier otra sanción que le sea pertinente. En dicho supuesto primero corresponde la prevención, luego la recomposición y, en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento.</p>
	<p>9. Prohíbese conforme lo dispuesto en las normas nacionales y provinciales específicas (Código de aguas provincial según leyes N° 2952, 3183 y otras) el uso de las aguas públicas, materiales en suspensión, álveos o lechos, fuera de los casos expresamente previstos en dicha ley y conforme a las pautas generales y especiales, que definan la autoridad de aplicación de aguas, la autoridad ambiental del ANP y el PM.</p>
Procedimentales	<p>10. A los efectos de la presente se entenderá por agua continental, a aquella que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos hasta la línea de las más altas mareas y las atmosféricas.</p>
	<p>11. En todo proyecto de decisión administrativa que se dé ante cualquier autoridad provincial que pueda tener potencial impacto sobre el sistema agua dentro o con incidencia sobre el ANP, se deberá dar intervención obligatoria y vinculante a la Autoridad de Aplicación del presente plan, a efectos de compatibilizar la decisión con las pautas de manejo del recurso hídrico del presente PM, bajo pena de nulidad.</p>
	<p>12. A esos efectos resultará obligatorio por todo sujeto público y/o privado mixto o de cualquier especie sin excepción, que desee utilizar las aguas referidas, la obtención de permiso o concesión otorgados por la autoridad competente en materia hídrica, en las modalidades y condiciones que determinadas en la normativa vigente con intervención plena, vinculante, y obligatoria de la autoridad de aplicación del ANP.</p>

3.2.3 Para la protección de la flora y la vegetación

Para la protección de la flora y la vegetación	
Normativas	1. Prohíbese la introducción y radicación en todo el territorio del ANP de ejemplares vivos de flora exótica, sean plantines, semillas o frutos que puedan alterar los procesos ecológicos, afectar actividades económicas o perturbar el cumplimiento de los fines de este plan.
	2. Elabórese un registro de las especies introducidas hasta el momento a efectos de disponer de la información sobre presencia, abundancia, distribución y propagación de las poblaciones de especies exóticas y verificar su evolución.
	3. Promuévase la erradicación de las poblaciones exóticas que sean declaradas invasoras a través de intervenciones localizadas y/o planes de erradicación o de control.
	4. Establézcase una regulación específica para el empleo de especies para jardines y espacios verdes de la villa de la Lobería o a los fines de mantener los rasgos del paisaje y evitar la creación de fuentes de propagación de especies invasoras.
	5. Prohíbese la recolección, tenencia, posesión, transformación y comercialización de especies de flora autóctonas o derivados de ellas, salvo expreso permiso previo fundado en evidencia científica otorgado por la autoridad de aplicación.
	6. Establécese que todas las actividades de control y manejo de flora y vegetación serán ejecutadas exclusivamente por la autoridad de aplicación de la ley 2.669 o por las personas designadas por la misma.
	7. Prohíbese en el ANP el uso de productos venenosos o tóxicos por fuera del interior de las viviendas urbanas y rurales. Sólo la autoridad de aplicación podrá permitir su uso al exterior de ese ámbito mediante resolución fundada.
Procedimentales	8. Se deberá controlar estrictamente -como autoridad ambiental del ANP- los usos y prácticas aplicadas dentro de las propiedades privadas de la zona de usos múltiples, tanto rurales como dentro de la villa de la Lobería, acompañando el control con tareas de extensión técnica para su mejor comprensión y aplicación.
	9. Se deberá monitorear regularmente a las poblaciones de las especies invasoras y establecer un sistema de alertas sobre invasiones reales o potenciales, para actuar preventivamente.
	10. En todo proyecto de decisión administrativa que curse ante cualquier autoridad provincial que afecte a la flora y la vegetación del ANP, la intervención de la Autoridad de Aplicación de la ley 2.669 será obligatoria, vinculante y aplicará bajo

	pena de nulidad de las decisiones que se tomen sin cumplir con este procedimiento.
	11. Se promoverá la recomposición de ambientes con especies de la flora autóctona, la reintroducción de especies localmente extinguidas y/o el repoblamiento ¹⁰ , con el objeto de restaurar las funciones del ecosistema natural, cuando evaluaciones científicas exhaustiva e informes técnicos determinen la conveniencia recurrir a esos métodos.
	12. Se diferenciará en las regulaciones y decisiones la actividad y demandas productivas de los predios rurales privados preexistentes de la que corresponda a la villa turística de la Lobería, dentro de sus límites específicos.
	13. Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades, previsiones tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios y normas establecidos en el presente para la protección de la flora y la vegetación. En ningún caso podrán adoptar decisiones que se opongan o contradigan a la protección de la flora y la vegetación según lo establecido en el presente plan de manejo.
	14. En todo proyecto de obra pública o privada sin excepción deberá darse intervención a la autoridad de aplicación de la Ley 2.669, en forma previa a cualquier determinación a fin de considerar sus impactos negativos sobre flora y vegetación, máxime cuando se realicen estudios de impacto ambiental de cualquier tipología.
	15. En los establecimientos rurales deberán reconsiderarse los usos agrícolas y los cultivos en general, tendiendo a minimizarlos progresivamente y a integrarse a las finalidades generales del ANP, reduciendo los impactos antrópicos a través de planes de reconversión. Sin establecerse prohibiciones expresas se deberán elaborar nuevos procesos productivos y estimular la compatibilización de usos y la protección de flora, fauna y ambiente en general.

3.2.4 Para la protección de la fauna

El reglamento que regula la protección de la fauna dentro del ANP tiene por objeto incorporar reglas jurídicas específicas para ese territorio, dentro del marco de las normas generales aplicables nacionales y provinciales.

Se considerarán alcanzadas por tal reglamento a todas las actividades que puedan generar externalidades sobre la fauna, atendiendo también a los daños que puedan

¹⁰ Conocido en inglés como *rewilding*

producirse por actividades sucedidas en el exterior de su espacio de las que pueda demostrarse vinculación directa o inevitable con la biodiversidad protegida.

Para la protección de la fauna	
Normativas	1. Dispónese que la reglamentación sobre la fauna para el ANP tendrá alcance sobre las siguientes acciones: caza, aproximación indebida, hostigamiento, persecución, captura, destrucción de crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.
	2. Prohíbese la caza de ejemplares de la fauna en todo el territorio del ANP.
	3. Prohíbese dar libertad a animales en cautiverio dentro del ANP, cualquiera fuese la especie o los fines perseguidos, sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación basada en una evaluación científica exhaustiva, según corresponda.
	4. Prohíbese la introducción y radicación en el territorio del ANP de ejemplares vivos, semen, embriones, huevos para incubar y larvas de cualquier especie que puedan alterar los procesos naturales, afectar actividades económicas o perturbar el cumplimiento de los fines de este reglamento. La autoridad de aplicación elaborará el listado de especies excepcionadas para su ingreso.
	5. Prohíbese la comercialización de especies de la fauna o derivados de ellas, dentro del ANP, salvo expresa excepción y autorización de la autoridad de aplicación.
	6. Establécese que toda determinación sobre el manejo directo de la fauna dentro del ANP será válida sólo cuando sea dictada por la autoridad de aplicación del ANP, previa intervención vinculante a la autoridad de aplicación respectiva en materia de fauna. De no ser cumplido se solicitará su nulidad.
	7. Establécese que en todo proyecto de decisión administrativa en que se presuma incidencia directa o indirecta sobre la protección de la fauna en el ANP se deberá dar intervención a la autoridad de aplicación del ANP en forma obligatoria y vinculante. De no ser cumplido se podrá solicitar la nulidad.
	8. Prohíbese en el ANP el uso de productos venenosos o tóxicos para la fauna por fuera del interior de las viviendas urbanas y rurales. Sólo la autoridad de aplicación podrá permitir su uso por fuera de ese ámbito mediante resolución fundada.
	9. Determinase que los establecimientos rurales privados deberán definir su capacidad su carga y en su evaluación se deberá considerar su incidencia sobre la fauna silvestre.
	10. Dispónese que previo a autorizar actividades que impliquen algún acercamiento a poblaciones silvestres deberá estudiarse el grado de tolerancia e impacto de la

Procedimentales	presencia humana sobre la especie y ajustar según ello el modo de avistaje o actividad.
	11. Prohíbese toda actividad de acercamiento y/o persecución, navegación, natación y buceo, a cualquier especie de mamífero marino y sus crías, en las costas y mar de jurisdicción del ANP, sin autorización de la autoridad de aplicación, bajo las condiciones del presente PM y las que se determinen oportunamente.
	12. Prohíbese el acercamiento humano a las colonias de especies de mamíferos o aves marino-costeras en las zonas o sectores que hayan sido delimitadas como intangibles en la zonificación, debiendo aplicarse el principio precautorio ante la duda sobre los impactos que pueda provocar una actividad a ser considerada, promoviéndose evaluaciones técnicas antes de habilitar otras conductas.
	13. Las actividades periodísticas o de cualquier otro tipo, avaladas por entidades nacionales, provinciales, argentinas o extranjeras, que impliquen interacción con mamíferos marinos, quedan comprendidas por las presentes reglas y ajustarse estrictamente a ellas.
	14. Se promoverá la reintroducción de especies de fauna autóctona con el objeto de restaurar las funciones del ecosistema natural, previa evaluación científica exhaustiva al respecto
	15. Cualquier proceso de autorización de parte de la autoridad de aplicación del ANP tendiente a intervenir sobre la fauna silvestre deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) se deberá realizar un informe circunstanciado basado en evidencia científica sobre los impactos que podrían derivar de la acción sobre la fauna, sobre el ambiente en general y sobre los valores de conservación del ANP; b) se materializará dando lugar a la intervención de la autoridad de aplicación sectorial en materia de fauna.
	16. Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades que afecten al AP con previsiones de carácter ambiental tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios y normas establecidos en el presente PM en materia de conservación y/o protección de la fauna.
	17. Conforme las normas generales nacionales y provinciales la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio del ANP pertenece al dominio público del Estado provincial. Su protección, conservación, propagación y repoblación serán de interés público. De manera excepcional el Estado se resguarda la posibilidad de otorgar mediante permisos precarios, autorizaciones para determinados usos sustentables de la fauna, y mediante los procedimientos administrativos preestablecidos
	18. En el orden municipal y para el desarrollo de la villa turística de la Lobería no se podrán adoptar decisiones ni asumir criterios que puedan interferir con la política de defensa de la fauna establecida en la presente PM.

	19. En los proyectos de obra pública o privada que requieran de estudios de impacto ambiental de cualquier tipología dentro del territorio del ANP o que en mayor escala lo comprendan, deberá darse intervención previa a cualquier determinación a la autoridad de aplicación a fin de considerar sus impactos negativos sobre la fauna silvestre y el ambiente en el que se desenvuelve.
Para condicionar los permisos y autorizaciones en materia de fauna	
	<p>20. Establécese que todas las actividades, permisos y autorizaciones de cualquier tipo que impliquen o resulten en aproximaciones y/o avistajes de fauna, estarán sujetas a estricto control oficial de los funcionarios del ANP y se deberá cumplir como mínimo con lo siguiente, ya sea para actividades individuales, grupales, periodísticas, estudios científicos o para el uso turístico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Queda prohibido en cualquier tipo de actividad la molestia a individuos de la fauna, el acercamiento innecesario y/o la persecución, especialmente a animales con cría. b. Queda expresamente prohibida toda acción que implique contacto físico con los animales. c. Si el acercamiento se produjera por circunstancias fortuitas navegando con embarcación a motor, deberá producirse el alejamiento inmediato, en caso de imposibilidad detener el motor y de tratarse de motores fuera de borda proceder al levantamiento de la unidad impulsora cuando la distancia sea menor a cien (100) metros de cualquier ejemplar d. En cualquier circunstancia que implique navegación se prohíbe realizar cambios múltiples de velocidad ante la presencia de ejemplares en la zona o manejar en círculos alrededor de uno o más ejemplares. e. Ante el alejamiento activo de los mamíferos se prohíbe iniciar la persecución. f. Los buzos y nadadores y/o pescadores, deberán permanecer a una distancia no menor de cien (100) metros de los mamíferos marinos. g. Queda prohibido sobrevolar a menos de ciento cincuenta (150) metros de altura sobre los apostaderos permanentes o circunstanciales donde se encuentren mamíferos marinos. h. Cuando el acercamiento se produzca con embarcaciones a remo se establecen similares restricciones que a las embarcaciones a motor, tomando en cuenta las que sean pertinentes. i. Prohibir el acercamiento y/o aproximación a cetáceos de cualquier tipo durante el desarrollo de actividades de buceo. j. Queda expresamente prohibida la captura y recolección de animales, huevos, nidos, etc., o la destrucción de guaridas y refugios, salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación del ANP.
Para circunstancias críticas o extraordinarias con fauna	
Normativas	21. La autoridad de aplicación podrá declarar zonas críticas de carácter extraordinario y de excepción ante cambios de localización y conductas de los mamíferos, de la reproducción y nidificación de las aves o ante la verificación de condiciones que deban ser tenidas en cuenta para asegurar la conservación de individuos o poblaciones de especies que representen valores de conservación o que se encuentren declaradas en peligro.

	22. Las medidas anteriores podrán ser tomadas preventivamente por el agente delegado local de la autoridad de aplicación cuando amerite urgencia y motivación, hasta tanto se dicte una reglamentación o protocolo al efecto, o se emita el acto administrativo de la autoridad de aplicación.
	23. Cuando las condiciones de la zona crítica motivada en este acápite lo ameriten en respuesta a eventos circunstanciales, la autoridad de aplicación o a su pedido y según la relevancia sus autoridades superiores, podrá convocar a un Comité de Crisis para coordinar y atender a las respuestas, compuesto por las áreas competentes, nacionales, provinciales y municipales, más otros especialistas, que se estime puedan facilitar conocimientos y soluciones apropiadas.
Procedimentales	24. La autoridad de aplicación elaborará a partir de las experiencias que se vayan acumulando, un protocolo de actuación para los casos que puedan llevar a la declaración de zonas críticas, en coordinación con las autoridades competentes.

3.2.5 Para la introducción y el manejo de mascotas en el ANP

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro dictó recientemente la RESOL-2022-51-E-GDERNE-SAYCC#SGG, publicada en el Boletín Oficial N° 6055 del 31 de enero de 2022, en la que se establece: “*Queda expresamente prohibido el ingreso de visitantes con perros, gatos u otros animales domésticos y/o de compañía en el Balneario La Lobería, perteneciente a la zona intangible y restringida del ANP, con excepción de los animales que cumplan funciones de asistencia o guía de personas con discapacidad (debidamente certificados), y aquellos que las autoridades competentes consideren necesarios ante situaciones de extravíos y/o rescates de personas (...).*” (Art. 3°).

Los Considerandos del acto administrativo son contestes con lo expresado al inicio de este capítulo sobre la competencia para emitir reglamentaciones ambientales sin mengua alguna sobre toda el ANP.

Sin embargo, esta regulación parece insuficiente en base a otras experiencias en áreas protegidas del país, porque no establece un control sobre las mascotas que se encuentran en toda el ANP, habiéndose omitido regular sobre la zona de uso múltiple y en particular sobre el área urbana¹¹. Así, será imposible evitar que las mascotas deambulen libremente o tomen contacto directo o indirecto con la fauna (que no se limita a los mamíferos marinos de la zona intangible). Por lo tanto, se considera la siguiente norma:

¹¹ La Ordenanza N° 6.824/2010 de la Municipalidad de Viedma no parece instrumento suficiente para los fines ambientales y no correspondería resignar la competencia específica porque no es lo mismo el espacio urbano dentro del ANP que cualquier otro, según lo reconoce el Art. 21, inc.i) y K) de la ley 269. .

Para la introducción y el manejo de mascotas en el ANP

Normativas	<p>1. Prohíbese la introducción de mascotas de cualquier tipo al ANP, salvo suceda en tránsito vehicular por caminos y rutas y/o dentro de las viviendas de la villa turística de la Lobería.</p>
	<p>2. Dispónese que sólo podrá introducirse una mascota por vivienda de la villa de la Lobería, previo registro y autorización expresa, cumplidos los requisitos que a ese efecto se establezcan, la que solo podrá permanecer dentro de los edificios o de sectores perfectamente cercados, o atada. Cualquier excepción en función de compatibilizar los derechos de los habitantes del AP con los derechos de protección de la fauna estará limitada a espacios bien confinados dentro del perímetro de la villa turística.</p>
	<p>3. Dispónese que en la subzona rural sólo podrá introducirse una mascota por vivienda o por predio rural, previo registro y autorización expresa, cumplidos los requisitos que a ese efecto se establezcan, la que solo podrá permanecer dentro de los edificios o dentro de las áreas de trabajo acompañada por sus responsables, o en sectores perfectamente cercados, o atada. En horario nocturno en ninguna circunstancia podrá deambular libremente.</p>
	<p>4. Exceptúase de esta prohibición a los perros guía de personas con limitaciones visuales.</p>
	<p>5. Considérase falta grave atentatoria contra la integridad de la fauna de los responsables propietarios o tenedores de las respectivas mascotas, la presencia de animales sueltos por fuera de los lugares permitidos, a los fines de la consideración para la aplicación de multas y otras sanciones previstas en la ley 2669.</p>
	<p>6. Consideráse falta grave atentatoria contra la integridad de la fauna de los responsables propietarios o tenedores de las respectivas mascotas, el paseo de animales mascotas sea sueltos o sujetados a correa por el territorio del ANP, cuando suceda en forma reiterada y haciendo caso omiso de las advertencias sobre el particular, a los fines de la aplicación de multas y otras sanciones previstas en la ley 2669,</p>
	<p>7. Establécese el control sanitario obligatorio de los animales domésticos, requisito que será exigido por la autoridad de aplicación a efectos de evitar el contagio de enfermedades hacia la fauna autóctona.</p>
	<p>8. Determináse que cuando se detecten animales que no cumplan con los requisitos sanitarios exigidos, previa intimación a sus responsables, estos podrán ser retenidos hasta que se supere la conducta, o decomisados transcurridos treinta (30) días de lo anterior de no haberse modificado la condición.</p>

	9. Prohíbese terminantemente el acceso de animales mascota de cualquier especie y tipo a la playa y las zonas de usos restringidos e intangible, salvo perros guía. Se considerará falta grave del responsable del animal. Se señalará debidamente esta prohibición y las sanciones en todos los lugares de acceso.
	10. Prohíbese expresamente el deambular de gatos, debiendo permanecer encerrados y sólo permitiéndose en la villa de la Lobería animales castrados de la especie.

3.2.6 Para la navegación

Para la navegación	
Normativas	<p>1. Prohíbese la navegación dentro del ANP, con excepción de los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La de las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones. b) La que resulte de habilitaciones refrendadas por la autoridad de aplicación del ANP, en el marco del PM como por ejemplo las necesarias para la investigación. <p>2. Prohíbese la navegación en cualquier circunstancia en proximidad de mamíferos marinos, o realizar círculos alrededor de los ejemplares, cambios múltiples de marcha, interceptación de su paso y cualquier movimiento que pueda considerarse hostigamiento o persecución.</p> <p>3. Establécese que dentro de la jurisdicción marítima del ANP, la navegación no podrá desarrollarse en ningún caso a velocidades superiores a los DIEZ (10) nudos manteniendo en todo momento la gobernabilidad y maniobra de la embarcación.</p>
Procedimentales	<p>4. Se recomienda invitar a la Prefectura Naval Argentina a dictar una Disposición, normas y protocolos en concordancia y coordinación con la autoridad de aplicación que incorpore lo contenidos y la zonificación establecida en el presente PM.</p> <p>5. Se considerará proponer a la Prefectura Naval Argentina actuar como agente de fiscalización y control de las normas derivadas de la zonificación dispuesta en el presente PM, en coordinación con los agentes del ANP.</p> <p>6. Ante situaciones motivadas en razones de fuerza mayor que lleven al tránsito de una embarcación por dentro de la jurisdicción parte marítima del ANP, el patrón de la embarcación lo deberá informar a la Prefectura correspondiente</p>

	y debería coordinarse con la misma para que la comunicación llegue inmediatamente a la autoridad de aplicación del ANP.
	7. De producirse colisiones con cetáceos dentro de la jurisdicción, o en caso de observarse y/o constatare esta situación, los patrones de las embarcaciones involucradas deberán informarlo de inmediato, al igual que si se observaran especímenes con lesiones que pudieran haber sido producidas por colisiones.
	8. Se propondrá a la Prefectura que declare Zona de Protección Especial al ANP en su parte marítima para otorgar una categoría de prevención acorde y evitar vulnerabilidades sobre aguas y costas jurisdiccionales.

3.2.7 Para la protección de los recursos culturales

Para la protección de los recursos culturales	
Normativas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Déjase expresa constancia que resultan plenamente aplicables al presente apartado todas las normas nacionales y provinciales vigentes para la protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico. 2. Señálase que, en caso de incertidumbre sobre la potencial afectación de elementos integrantes del Patrimonio Cultural, la autoridad de aplicación del ANP priorizará la aplicación del principio precautorio y pospondrá cualquier autorización hasta tanto se cuente con la suficiente información que permita evitar el daño sobre el patrimonio cultural. 3. Prohíbese la extracción de materiales arqueológicos y/o paleontológicos, históricos o de cualquier elemento integrante del Patrimonio cultural, salvo uso científico autorizado por la autoridad competente con intervención de la autoridad de aplicación del ANP. 4. Prohíbese el acceso público a las áreas de importancia cultural situadas en tierras de propiedad privada. La autoridad de aplicación coordinará el mejor modo de llevar adelante esta prohibición con los propietarios. 5. Considérese al Patrimonio Cultural como elemento de relevancia y prioritario en todo procedimiento tendiente a otorgar autorizaciones para actividades en territorio del ANP y en todo procedimientos de evaluación de impacto ambiental. 6. Facúltase a la autoridad de aplicación del ANP a declarar transitoriamente cuando lo considere pertinente, áreas de importancia cultural como zonas de rehabilitación y estudio, otorgándoles la categoría de intangibles a los fines

	del uso público y visitación, cuando existan motivos suficientes y mediante acto administrativo.
Procedimentales	7. En todo proyecto de decisión administrativa que se dé ante cualquier autoridad provincial que aplique sobre la protección del Patrimonio Cultural dentro del ANP se deberá dar intervención a la Autoridad de Aplicación pertinente en forma obligatoria y vinculante, bajo pena de nulidad.
	8. La Autoridad de Aplicación pertinente determinará la extensión de las áreas con patrimonio cultural e identificará para su manejo la ubicación catastral de las mismas.
	9. En caso de producirse afectaciones a sitios del patrimonio cultural como consecuencia de acciones desarrolladas o autorizadas por otras autoridades competentes, deben restaurarse los sitios, de oficio o a petición de la autoridad de aplicación del ANP, para lo que deberá establecerse un mecanismo de coordinación.

3.2.8 Para el uso de los predios rurales de propiedad privada

Para el uso de los predios rurales de propiedad privada	
Normativas	1. Considéranse preexistentes las actividades agropecuarias realizadas dentro de la zona categorizada como de uso múltiple del ANP de propiedad privada, las que podrán ser reconocidas como sustentables en la medida que se adapten a los objetivos de conservación del ANP.
	2. Facúltase a la autoridad de aplicación del ANP para promover y fiscalizar los planes productivos de los predios rurales privados, en los términos del art. 21 inciso k) de la ley 2669
	3. Autorízanse las actividades agrícolas sólo en los espacios tradicionalmente empleados de las propiedades privadas procurándose su minimización progresiva sin impedir la producción en la medida en que no se produzcan pérdidas de suelo ni procesos de desertización.
	4. Oriéntense los planes productivos rurales hacia el desarrollo sustentable, basado en la combinación de usos tradicionales extensivos y a nuevas tecnologías, estas últimas dentro de mínimos espacios perfectamente delimitados, con criterios y prácticas silvopastoriles para la protección del monte nativo donde sea posible y de su fauna, para minimizar el impacto sobre el ambiente.

	5. Prohíbese en los predios rurales del ANP cualquier modalidad de ganadería intensiva como <i>feedlot</i> u otra equiparable de engorde a corral, al igual que la crianza intensiva de aves.
Procedimentales	6. Se impulsarán los estudios necesarios para determinar el estado del suelo y del ambiente, monitoreando la realidad en que sucede el desarrollo productivo a través de indicadores de sustentabilidad físicos, químicos y biológicos que determinen los impactos positivos y negativos de los procesos.
	7. La autoridad de aplicación en conjunto con los demás organismos oficiales deberá planificar y coordinar acciones tendientes a asegurar un permanente control sanitario para prevenir y eliminar enfermedades transmisibles a la fauna y cualquier tipo de zoonosis.

3.2.9 Para la pesca en general

Para la pesca en general	
Normativas	1. Permítase la pesca deportiva costera sin embarque sobre la jurisdicción marítima del ANP dentro de la zona habilitada a ese uso, en las zonas, épocas y modalidades que en el presente plan de manejo y las normas vigentes autoricen. Queda vedada en todo el resto de la jurisdicción.
	2. Prohíbese la extracción de invertebrados marinos en toda el ANP, incluyendo la extracción de moluscos, las actividades de pesca deportiva embarcada y submarina, y la conocida como "pulpeo".
	3. Defínese como pesca deportiva de costa, a todos los efectos de la reglamentación, a todo acto de apropiación o aprehensión que sea realizado por cualquier sistema o medio legalmente permitido de ejemplares de la ictiofauna en general cobrados desde la costa sin el empleo de embarcaciones o cualquier tipo de artefacto para la navegación o flotación.
	4. Determínase que para el ejercicio de la pesca deportiva de costa en aguas del ANP los interesados deberán dar cumplimiento a las normas estatuidas en los reglamentos que al efecto se hallen vigentes o que en el futuro se dicten para la conservación del ambiente y los recursos, y el pago de las licencias cuando éste sea exigido.
	5. Prohíbese la pesca comercial, artesanal y los concursos de pesca deportiva dentro de la jurisdicción del ANP, cualquiera sea su modalidad.
	6. Prohíbese en el ejercicio de la pesca deportiva en el ANP:

	<ul style="list-style-type: none"> a) arrojar, colocar, o dejar llegar a las aguas, en forma permanente o transitoria, sustancias cuya naturaleza o efectos resulten o puedan resultar nocivas para el ambiente costero - marino. b) introducir toda fauna o flora exótica, y agregar o difundir las ya introducidas, que no sean objeto de cultivo o crianza en cautividad. c) usar toda clase de artes, máquinas, explosivos y aparejos de pesca que no sean los estrictamente permitidos por la autoridad de aplicación y la autoridad de pesca. d) abandonar materiales en el lugar, de cualquier índole, los que deberán ser retirados del ANP haciéndose excepción de los que resulte imposible recuperar como resultado inevitable de la práctica de las artes deportivas
Procedimentales	<p>7. Para el buen desarrollo de la actividad y su adecuación al ANP será conveniente elaborar y difundir un manual de buenas prácticas pesqueras, a efectos de minimizar los impactos sobre el ambiente que pueden derivar de prácticas y costumbres tradiciones a veces poco recomendables (residuos, anzuelos, líneas permitidas, primacía de otras actividades, aproximación a mamíferos, marinos, etc.).</p> <p>8. Para diferenciar a la actividad dentro del ANP con relación a otros espacios naturales costeros puede ser conveniente establecer licencias especiales acordadas y coordinadas con la autoridad de pesca provincial, estableciéndose el monto a pagar, duración, condiciones para el desarrollo de la actividad y toda otra determinación pertinente.</p> <p>9. En caso de otorgarse licencias para la pesca deportiva costera especiales para el ANP, éstas serán personales e intransferibles y las decisiones deberán ser coordinadas entre la autoridad de aplicación del ANP y la pesquera y ser compatibilizadas con el Plan de Manejo</p> <p>10. La autoridad de aplicación del ANP podrá restringir la pesca a determinados sectores a los fines de segregar usos y evitar molestias y riesgos.</p>

3.2.10 Para el uso turístico y recreativo

Para el uso turístico y recreativo	
Generales	
Normativas	<p>1. Establécese que toda la actividad turística y recreativa, sea como actividad individual particular o comercial, se desarrollará dentro del ANP</p>

	<p>estrictamente en las condiciones establecidas por el PM y según las normas vigentes.</p>
	<p>2. Determinase que las regulaciones ambientales determinadas para el ANP y las específicas que resulten del PM serán prevalentes sobre las reglas y normas generales de cada actividad, aplicándose las con primacía ante caso de supuestos no previstos.</p>
	<p>3. Defínese a los fines del presente PM como prestador/operador turístico alternativo sostenible a todas aquella persona humana física o jurídica legalmente habilitada, que brinde o explote productos y/o servicios no usuales para el turismo tradicional, en los que se ponga énfasis en los conceptos y tendencias hacia la conservación, preservación, educación, interpretación de la naturaleza y en el bajo impacto sobre el patrimonio natural y cultural, ofreciendo servicios identificables como ecoturísticos a los visitantes.</p>
	<p>4. Permítanse las siguientes actividades turísticas dentro de las zonas habilitadas a esa finalidad dentro del ANP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Campamentismo, b. Alojamiento sólo en establecimientos extra hoteleros que el PM y el COT permitan dentro de la Villa de la Lobería o en los establecimientos rurales. c. Avistaje de aves y mamíferos d. Kayak, e. Cabalgata, f. Ciclismo, g. Caminatas, h. Fotografía y filmación. i. Sol y playa. j. Gastronomía y alimentación
	<p>5. Promuévase la transformación progresiva de todas las actividades turísticas y la visitación hacia actividades ecoturísticas de bajo impacto y alto compromiso con los objetivos del ANP</p>
	<p>6. Determinase que las actividades turísticas y recreativas no previstas en el artículo anterior quedan prohibidas, a menos que luego de presentada una propuesta detallada, la previa evaluación de su impacto ambiental y análisis de sus efectos concurrentes con otras actividades, y cumplidos los procedimientos administrativos y técnicos, se proceda a su habilitación en particular, en tanto no se contrapongan con el PM.</p>
	<p>7. Dispónese que las declaraciones de impacto ambiental serán otorgadas únicamente por la autoridad de aplicación del ANP y las actividades propuestas sólo podrán ser habilitadas de resultar un bajo impacto.</p>

	8. Hácese saber que la autoridad de aplicación considerará en todos los casos los impactos acumulativos que las diferentes actividades turísticas producen sobre el ANP, basándose en ese criterio para evaluar y producir las declaraciones de impacto, pudiendo restringir en consecuencia actividades en curso de ejecución, o autorizar nuevas.
Procedimentales	9. El procedimiento para evaluar propuestas de servicios turísticos comerciales se iniciará mediante una presentación formal de proyecto por parte del interesado solicitante ante la autoridad de aplicación, quien realizará primero una evaluación expeditiva sobre su encuadre y viabilidad. A través de ese primer paso se definirán los requisitos del estudio de impacto necesario y el nivel de la exigencia técnica a cumplir.
	10. Cuando se tratare de propuestas repetitivas como es el caso de visitas a receptivos con infraestructura consolidada (ejemplo: senderos y miradores contruidos, recorridos y servicios en la Villa turística, playa y Centro de Interpretación, etc.) podrán no requerirse estudios de impacto, pudiendo encuadrarse en estudios prospectivos generales de capacidad de carga e impacto y en las normas generales para el manejo de los sitios visitados.
	11. Para actividades propuestas de carácter eventual, singular y excepcional, sólo podrán autorizarse por resolución de la autoridad de aplicación del ANP o por actos administrativos conjuntos que la incluyan, fundamentadas en evaluaciones ambientales.
	12. En caso de dudas o colisión entre contenidos de normativas específicas y de las habilitaciones de actividades, todas las normas serán subsidiarias respecto del presente PM.
	13. Resulta oportuno considerar que las actividades turísticas previstas en el presente PM sean gravadas a los fines de contribuir al financiamiento de la protección y desarrollo del ANP, retribuyendo el esfuerzo especial que su diseño y control requiere. Merece considerarse su contribución al fondo especial que corresponda según la organización administrativa y en el marco de la ley 2669 (Título V, art. 23 y 24) y demás normas que se establezcan a ese efecto.
Actividades de campamentismo	
Normativas	14. Prohíbese el acampe libre en todo el territorio del ANP.
	15. Permítase el acampe sólo en los siguientes posibles lugares: a) campamento organizado en Va. de la Lobería. Y b) establecimientos rurales que así lo soliciten.
	16. Determinase que en los establecimientos rurales a los que eventualmente se habilite a brindar alojamiento en campamento, considerando el proyecto recibido, se cumplirá con lo siguiente:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Los proyectos solo podrán ser presentados y gestionados por los propietarios o sus representantes apoderados. b. Los sitios que se proyecten para esta finalidad serán sometidos a evaluación de impacto ambiental del emplazamiento, de sus servicios y actividades y del conjunto al que se integre en su localización específica. Se evaluarán los impactos acumulativos derivados del emplazamiento y funcionamiento. La declaración de impacto ambiental será dada por la autoridad ambiental. c. Se determinarán la modalidad y normas por las que se regirá el servicio, zonificándose internamente y definiéndose los servicios aprobados que allí se podrán brindar. d. Cuando los propietarios destinen predios a los fines de esta actividad para que sea brindada a través de terceros, la condición deberá quedar expresamente establecida en la propuesta respectiva y actualizarse las responsabilidades cada vez que alguno de esos titulares responsables cambie. e. Las habilitaciones serán otorgadas determinando su respectiva “cubierta”, aforo o capacidad de carga, con el deslinde espacial perfectamente graficado indicando límites y superficie de los predios, distribución de las instalaciones internas para cada una de las actividades (parcelas, caminos, senderos, baños públicos, proveeduría y otros servicios), pautas para la infraestructura, entre otras condiciones. f. La implantación y el funcionamiento resultante de los servicios, deberán desarrollarse íntegramente bajo el principio de menor intervención sobre el ambiente y mediante la aplicación de protocolos de buenas prácticas ecoturísticas que prevengan impactos sobre los valores de conservación.
Procedimentales	17. Las habilitaciones solo podrán ser otorgadas con intervención de la autoridad de aplicación del ANP, previo estudio ambiental
Para actividades de buceo	
Normativas	18. Autorízase el buceo exclusivamente para su práctica dentro del ANP de manera libre y particular. No se permitirá la prestación de servicios comerciales por parte de operadores.
	19. Permítase el desarrollo de la actividad de buceo dentro de la zona de usos restringidos definida en el PM y en ella, donde la autoridad de aplicación del ANP lo determine para delimitar los espacios estrictos en que pueda alojarse esta actividad, pudiendo cambiar, rotar sitios o prohibirla según circunstancias y de acuerdo con lo que se considere necesario. Del mismo modo serán establecidos los lugares y épocas donde se pueda practicar.
	20. Prohíbese el empleo de cualquier tipo de embarcaciones para la actividad de buceo.

	<p>21. Prohíbese sumergir estructuras de cualquier tipo dentro del ANP, sean naturales o artificiales, como atractivo para facilitar o atraer la actividad, salvo se trate de elementos de seguridad aprobados por la autoridad de aplicación del ANP.</p> <p>22. Exijase a los particulares que deseen realizar la actividad todos los elementos de seguridad propios de la misma y hallarse habilitados según corresponda ante la autoridad de aplicación correspondiente, la que podrá ser requerida por cualquiera de los agentes de control del ANP.</p>
Para las actividades de cabalgata	
Normativas	<p>23. Autorízanse las actividades de cabalgata -individuales, grupales o comerciales- solo dentro de las propiedades rurales de la zona de usos múltiples del PM.</p>
	<p>24. Prohíbese terminantemente la actividad de cabalgata fuera de los predios rurales privados en todo el resto del territorio del ANP. Fuera de las mismas no se permitirá la circulación de excursiones o de personas a caballo, salvo resulte como complemento de la actividad rural propiamente dicha. Salvo tal excepción, se prohíbe el tránsito a caballo dentro de la Va. de la Lobería.</p>
	<p>25. Establécese que los propietarios rurales y/o los operadores que pretendan ejercer la actividad comercial de cabalgata deberán seguir los procedimientos administrativos correspondientes para habilitar la actividad ante la autoridad de aplicación.</p>
	<p>26. Determináse que los solicitantes de las habilitaciones deberán cumplir los siguientes requisitos, además de los generales de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aval del propietario del predio. b. Descripción del itinerario y de los lugares en donde se desarrollará la actividad, los que deberán ser evaluados por la autoridad de aplicación. c. Instalaciones que se desarrollarán u ocuparán. d. Descripción de las actividades asociadas que se proyecta realizar y los impactos que sobre el ambiente producirían. La autoridad de aplicación evaluará los mismos y dictaminará al respecto. e. Seguro correspondiente destinado a los usuarios de los servicios.
	<p>27. Determináse que la actividad sólo se ejecutará en los itinerarios, lugares, tamaño de grupo, guiado y épocas que la autoridad de aplicación autorice.</p>
Procedimentales	<p>28. Para las actividades de cabalgatas debe coordinarse con la autoridad de aplicación turística el procedimiento destinado a otorgar habilitaciones, considerándose que si bien es tradicional introduce un significativo impacto ambiental sobre el suelo y se trata de una actividad con cierto riesgo para las personas.</p>

Para las actividades de ciclismo	
Normativas	29. Autorízanse las actividades de ciclismo sólo dentro de la zona de uso múltiple del ANP y de todos los caminos habilitados del ANP. La actividad queda prohibida en el resto del territorio del ANP.
	30. Autorízanse las actividades de ciclismo en la zona de usos restringidos dentro de las vías de circulación preexistentes si las hubiere, restringiéndose el desarrollo de nuevas sendas en tanto no se emplacen sobre el cordón dunar costero o playa y que se demuestre que el impacto ambiental sea mínimo.
	31. Determinase que los solicitantes de autorizaciones para organizar excursiones -operadores- que pretendan realizar actividades turísticas con bicicletas deberán tramitar los procedimientos administrativos correspondientes para habilitar la actividad por ante la autoridad de aplicación.
	32. Determinase que los solicitantes de habilitaciones deberán cumplir los siguientes requisitos, además de los generales, presentando: <ul style="list-style-type: none"> a. Descripción del itinerario y los lugares en donde se desarrollará la actividad, los que deberán ser evaluados por la autoridad de aplicación. b. Descripción de las actividades asociadas que se proyecta realizar y los impactos que sobre el ambiente producirían. La autoridad de aplicación evaluará los mismos y dictaminará al respecto. c. Aval del propietario rural si la actividad comprendiera esos espacios de uso privado. d. Tipo de seguro correspondiente destinado a los usuarios de los servicios.
Procedimentales	33. Las habilitaciones solo podrán ser otorgadas con intervención de la autoridad de aplicación del ANP, previo estudio ambiental, si correspondiere, coordinándose con la autoridad de aplicación turística el procedimiento destinado a otorgar tales habilitaciones.
Para las actividades de caminatas	
Normativas	34. Autorízanse las actividades de caminatas -individuales, grupales o comerciales- en el ANP en el ejido urbano de la Va. de la Lobería y en los establecimientos rurales, y en los senderos autorizados de las zonas de uso múltiple y de uso restringido. Prohíbense en la zona declarada intangible.
	35. Establécese que no se podrán realizar u organizar caminatas por sitios identificados como peligrosos o vedados expresamente al acceso público y las actividades con circulación libre a campo traviesa, sin itinerarios prefijados por senderos existentes.
	36. Dispónese que las empresas operadoras que pretendan realizar actividades turísticas organizando caminatas guiadas deberán tramitar los

	<p>procedimientos administrativos correspondientes para obtener la habilitación ante la autoridad de aplicación.</p>
	<p>37. Los solicitantes de las habilitaciones deberán cumplir los siguientes requisitos, además de los generales, presentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Descripción del itinerario y de los lugares en donde se desarrollará la actividad, los que deberán ser evaluados por la autoridad de aplicación. b. Descripción de las actividades asociadas que se proyecta realizar y los impactos que sobre el ambiente producirían. La autoridad de aplicación evaluará los mismos y dictaminará al respecto. c. Aval del propietario rural si la actividad comprendiera esos espacios de uso privado. d. Tipo de seguro correspondiente destinado a los usuarios de los servicios.
Procedimentales	<p>38. Las habilitaciones solo podrán ser otorgadas con intervención de la autoridad de aplicación del ANP, previo estudio ambiental, si correspondiere, coordinándose con la autoridad de aplicación turística el procedimiento destinado a otorgar tales habilitaciones.</p>
<i>Para actividades de fotografía y filmación</i>	
	<p>39. Autorízanse las actividades de fotografía y filmación para fines no profesionales comerciales libremente en toda el ANP, siempre por fuera de la zona declarada intangible, salvo expresa autorización formal y fundada. No se podrán realizar en sitios señalados como peligrosos o vedados expresamente.</p>
	<p>40. Establécese que las actividades profesionales comerciales de fotografía y filmación se podrán realizar ajustadas a la normativa y a las condiciones específicas que para la actividad la acción en particular establezca la autoridad de aplicación.</p>
Normativas	<p>41. Dispónese que toda persona o entidad interesada en realizar actividades comerciales de fotografía y/o filmación dentro del ANP deberá solicitar autorización previa por escrito a la autoridad del ANP.</p>
	<p>42. Hácese saber que el otorgamiento de las habilitaciones procederá luego de verificar que no puedan presumirse riesgos, impactos o demanda significativa de personal para su atención que altere negativamente el funcionamiento de la organización y controles sobre el resto de las actividades.</p>
	<p>43. Transfiérase todo gasto significativo y extraordinario que demande la actividad a habilitarse o que se produzca en su consecuencia, para que sea soportado por el solicitante responsable del equipo de filmación y/o fotografía.</p>
	<p>44. Determinase que cuando la dimensión o los riesgos de las actividades lo requieran, a juicio de la autoridad de aplicación del ANP, se nombrará un</p>

	agente oficial veedor que acompañara permanentemente los trabajos en el terreno y será quien velará por el ejercicio de las mejores prácticas ambientales y el cumplimiento de todas las normas
	45. Exígesse que todo daño que se produzca sobre el ambiente en ocasión de la actividad, en forma directa o indirecta, deberá ser informado por el responsable de la actividad a la autoridad de aplicación del ANP y deberá ser recompuesto o resarcido según corresponda por sus responsables a los fines de su recomposición o compensación, además de la posible imposición de una sanción de apercibimiento o multas en los términos de la ley 2669
	46. Establécese que la autoridad de aplicación del ANP evaluará exigir seguros respecto de daños al ambiente o sobre la seguridad de las personas que realicen las actividades
Procedimentales	47. Se debe establecer hacia dentro del gobierno un acuerdo basado en la comprensión de que la fotografía y la filmación dentro del ANP no puede ser realizada libremente y bajo autorizaciones de cualquier autoridad, dado el tipo de bien que se resguarda y atento a los riesgos para las personas y al patrimonio natural y cultural, siendo esencial que las autorizaciones contengan contenidos para el resguardo adecuados y que la comunicación que resulte hacia terceros a partir de la actividad realizada no transmita información técnico-científica errónea o ponga en riesgo el manejo del ANP.
Para la actividad de sol y playa	
Normativas	48. Determinase que las actividades recreativas de sol y playa sólo podrán ser realizadas dentro de la zona de uso restringido del ANP en las condiciones que al efecto se determinen en general y las que correspondan según las circunstancias estacionales y diarias de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación del ANP y/o localmente los agentes designados a ese efecto.
	49. Priorícese para el desarrollo de estas actividades a la seguridad de las personas, tanto respecto del mar, como de cualquiera de los riesgos que pueden originarse en la zona intermareal en uso, especialmente los asociados a acantilados y restingas, y a la presencia de mamíferos marinos.
	50. Determinase que los visitantes/turistas deberán atender y acatar las indicaciones que los agentes públicos realicen con respecto a: <ul style="list-style-type: none"> a. La posición de sus campamentos diurnos de playa, particularmente respecto de los acantilados y áreas de riesgo debido a sus potenciales derrumbes. b. La distancia a ejemplares de la fauna. c. Las evacuación de sectores de playa o restinga que puedan quedar aislados o cubiertos por las mareas creando condiciones de peligro.

	<p>d. Las conductas inadecuadas tales como las molestias a la fauna, producción de alta sonoridad, interferencias o molestias a otros visitantes, voladura de elementos sean o no desechos, introducción subrepticia de mascotas, etc.</p> <p>e. La natación en zonas con riesgos asociados o en condiciones riesgosas del mar</p>
Procedimentales	<p>51. Por tratarse de condiciones prioritarias e insoslayables que deben ser atendidas por los agentes públicos, independientemente del objetivo principal al que estos se enfocan según la ley, debe capacitarse al personal y establecerse protocolos adecuados en especial ante los serios riesgos vinculados a algunos escenarios. Tales protocolos deberían involucrar la debida comunicación fija (perfectamente demostrable ante una revisión posterior hipotética de hechos dañosos) y también a la fuerza pública, considerando que en orden de intervención corresponde la información y disuasión primero, pero sigue la intervención.</p>

3.2.11 Para la investigación

Para la investigación	
Normativas	<p>1. Determinase que para el desarrollo de las actividades de investigación deberá atenderse a los criterios y normas provinciales generales y a las específicas de la autoridad de aplicación del ANP, con especial énfasis en las que figuran en el PM.</p> <p>2. Establécese que para iniciar el ejercicio de cualquier investigación en el territorio del ANP se deberá gestionar obligatoriamente la obtención del permiso correspondiente ante la autoridad de aplicación del ANP.</p> <p>3. Determinase que el permiso de investigación será personal e intransferible y se otorgará sólo en caso de que el proyecto sea compatible con los objetivos de conservación del PM.</p> <p>4. Infórmase que todo permiso otorgado por cualquier otra autoridad nacional, provincial o municipal serán nulo por sí mismo dentro del ANP y quienes lo detenten y sean detectados en una primera instancia serán apercibidos no pudiendo realizar ninguna actividad en el ANP hasta que normalicen su situación obteniendo la habilitación.</p> <p>5. Los interesados deberán presentar una solicitud que describa sucintamente su proyecto de estudio incluyendo:</p> <p>a. Hipótesis general del estudio.</p>

	<p>b. Duración y sitios en los que se realizará la colección de datos, elementos a recolectar y metodologías para hacerlo. Deberán detallarse las cantidades previstas y si fueran significativas respecto de la población de la especie, su justificación.</p> <p>c. Responsables/s del estudio y participantes durante su ejecución. Para el desarrollo de la actividad esta lista deberá permanecer siempre actualizada.</p> <p>d. Toda otra información que facilite la interpretación del estudio y del proceso de elaboración dentro del ANP.</p> <p>e. Compromiso de entrega de resultados a la finalización de la investigación.</p>
	<p>6. Dispónese que los permisos para realizar investigaciones serán otorgados sin cargo y se podrán solicitar seguros en caso de considerarlo oportuno la autoridad de aplicación del ANP.</p>
	<p>7. Establécese que la validez de los permisos tendrá un límite temporal de hasta dos años, venciendo siempre los 31 de diciembre del año posterior a su autorización, pudiendo ser renovados a simple solicitud de los interesados.</p>
	<p>8. Dispónese que todos los permisos de investigación quedarán registrados ordenadamente por cuenta de la autoridad de aplicación del ANP, quien deberá conformar una base de datos adecuada para su empleo oficial y consulta pública, preferentemente vía web.</p>
	<p>9. Apercíbese a todos los beneficiarios de permisos de investigación que en caso de no cumplirse con todos y cada uno de los pasos requeridos en las habilitaciones, incluyendo la entrega del informe final o publicación, los responsables quedarán vedados para obtener nuevas autorizaciones y caducará cualquiera que aún estuviera en curso.</p>
Procedimentales	<p>10. Dadas las prácticas consuetudinarias por las que distintos investigadores intervienen en los espacios naturales sin realizar trámite alguno, deberán realizarse reuniones y comunicaciones con los actores personales e institucionales de estos temas, para evitar malentendidos y situaciones enojosas. El régimen de autorización previa es habitual en todo el mundo y lo es en Argentina en la Administración de Parques Nacionales y otras entidades equivalentes del SIFAP.</p>
	<p>11. En función del posible empleo de material genético, inscripción de patentes y otras conductas, es muy importante que se consideren los antecedentes y recomendaciones del Convenio de Biodiversidad y de la autoridad nacional en la materia, además de la jurisprudencia aplicable.</p>

3.2.12 Para la instalación y el funcionamiento de la infraestructura y

equipamiento

Para la instalación y el funcionamiento de la infraestructura y equipamiento en el ANP	
Normativas	1. Establécese que serán objeto de estas normas la ejecución y supervisión de las nuevas obras y el mantenimiento de las ya existentes, el equipamiento necesario para el uso público del ANP y las obras privadas.
	2. Dispónese que la autoridad de aplicación del ANP, en conjunto con el sector ministerial de gobierno relacionado con las obras de infraestructura de la provincia en el ámbito del Consejo de Coordinación, evaluará ambientalmente previamente todas y cada una de las propuestas destinadas a la mejora o mantenimiento significativo de la infraestructura del ANP. La intervención de la autoridad ambiental del ANP es obligatoria y vinculante.
	3. Dispónese que cuando se planeen obras muy significativas de infraestructura en el ANP, dada la fragilidad de los ambientes y los impactos ya admitidos o producidos, se deberá realizar una evaluación ambiental estratégica de la totalidad de las obras de infraestructura existentes más las planificadas, incluyendo también en ellos los conductos de servicios, alambrados, caminos y potencial avance del proceso de urbanización de la Va. de la Lobería.
	4. Prohíbese la apertura de canteras y la extracción de áridos y materiales del suelo y subsuelo dentro del ANP.
	5. Recomiéndase aplicar sobre las vías de circulación vial pautas tendientes a la minimización de los impactos, incorporar elementos para informar y disminuir las velocidades permitidas, considerar la incidencia de la presencia de fauna y su potencial atropellamiento sobre todo en horarios críticos como la noche y alborada.
	6. Procúrese incorporar al diseño y desarrollo de los caminos y de las obras viales destinadas a su mantenimiento, técnicas que reduzcan el ancho de franja alterada al mínimo indispensable, que mantengan dentro de la zona de camino las formas naturales y en la medida de lo posible la vegetación natural.
	7. Los estacionamientos existentes o que se desarrollen en las inmediaciones del acceso a la playa del ANP Punta Bermeja deberán dimensionarse estrictamente según la capacidad de carga de la playa y teniendo en cuenta los flujos acumulados provenientes desde las diversas fuentes aportantes de visitantes.
	8. Toda nueva infraestructura pública por proyectar, que sustituya o mejore a la existente deberá diseñarse se acuerdo a:

	<ul style="list-style-type: none"> a. La consideración del mínimo impacto posible. b. La aplicación de las mejores prácticas en la ejecución de la obra. c. La presentación de los estudios de impacto ambiental que correspondan a su dimensión y potenciales impactos, incluyendo los concurrentes durante la obra y durante el funcionamiento posterior inducibles a partir de su implantación y funcionamiento. d. La capacidad de carga del ambiente donde se aloje la obra y sus consecuencias y la introducción de la mejor tecnología disponible en beneficio de la protección del ambiente y del paisaje, como por ejemplo la incorporación de redes subterráneas, la posición adecuada de las redes aéreas, la posición y condiciones de los campamentos de obra, etc. e. La aplicación del principio de compensación de los daños irreversibles que se habrían de producir, si los hubiere. f. La incorporación de sistemas de energía alternativa y/o del más bajo impacto (eólica, placas solares, hidrógeno, etc.) unidos a la aplicación de materiales y técnicas de máxima conservación de la energía. g. La necesidad de evitar crear nuevas huellas y marcas sobre el suelo, artificializando el paisaje natural. h. La elaboración de un protocolo específico para la supervisión y auditoría ambiental de la ejecución de las diferentes etapas de la obra proyectada de infraestructura (construcción, funcionamiento y potencial desmantelamiento) para el seguimiento del cumplimiento de las pautas y ante la presencia permanente de agentes del ANP que eviten los posibles desvíos. i. La consideración de las características diferenciales de los valores como patrimonio del ANP y destino turístico y de la necesidad de hacerlas significativas para la percepción de los visitantes.
Procedimentales	<ul style="list-style-type: none"> 9. Es recomendable considerar con los organismos que correspondan la coordinación necesaria para proteger el patrimonio natural y cultural, dada la prioridad establecida en ese sentido dentro del ANP, situación generalmente no habitual para las entidades que se ocupan de las obras públicas y sus concesionarios 10. Teniendo en cuenta la necesidad de un involucramiento de todos los actores, sería de gran utilidad que de los estudios ambientales deriven capacitaciones específicas, previas a cada intervención dentro del ANP

3.2.13 Para la villa turística de la lobería

Para la villa turística de La Lobería	
Normativas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desarrollése una identidad e imagen de la villa que valore el atractivo integrado del ANP: unificación del estilo de cartelería, portales de acceso y

	<p>señalización, rol activo y presencia de los guardas, mobiliario urbano, cartelera privada, espacios públicos, forestación de veredas, nomenclatura de calles, edificaciones públicas, materiales constructivos y estilos autorizados, etc.</p>
	<p>2. Recuérdase que según el Art. 21 inciso k) de la Ley provincial N° 2.669 la autoridad de aplicación del ANP posee como competencia “regular las actividades humanas para conservar los recursos naturales y culturales, en el ámbito territorial de las unidades de conservación” y que esta función primordial se aplica a la villa de la Lobería asignándosele la importancia que corresponde al resultar el área más antropizada del ANP.</p>
	<p>3. Recuérdase que según el Art. 21. i) de la Ley provincial N° 2.669 la autoridad de aplicación del ANP posee como competencia “Autorizar, controlar y regular, con acuerdo de los municipios competentes la urbanización de las áreas protegidas y zonas de amortiguación, cuyo manejo lo requiera” por lo que es su función determinar el tipo de desarrollo al que se orienta la evolución del espacio urbano habilitado.</p>
	<p>4. Establécese que la villa de la Lobería debe ser considerada como una urbanización sostenible modelo, por lo que deberán ajustarse todas las decisiones públicas y privadas para su evolución y diseño apropiados, para que la diferencien de otras áreas urbanas costeras.</p>
	<p>5. Exíjase a través de todos los instrumentos administrativos y orientativos, que las tecnologías que se seleccionen tanto para obras públicas como privadas sean las más apropiadas ambientalmente, en especial en materia energética, de cuidado del agua y de la gestión de residuos y aguas servidas.</p>
	<p>6. Prohíbese el inicio de toda obra edilicia nueva, de mejora significativa o de movimiento de suelo urbano cuya habilitación pertinente no haya sido acreditada ante la delegación establecida en el ANP de la autoridad de aplicación del ANP. Se paralizará inmediatamente y se procederá al secuestro preventivo de maquinarias y materiales que inicien actividades sin haber cumplido este requisito, si es necesario con la fuerza pública. La autoridad citada será quien dará el visto bueno para el inicio arriba mencionado.</p>
	<p>7. Adviértese que todo movimiento de suelo, obra, mejora o fraccionamiento sobre el terreno de cualquier tipo que se pretenda desarrollar por fuera de los estrictos límites urbanos reconocidos de la villa de La Lobería, que carezca de autorización o intervención debida de parte de la autoridad de aplicación del ANP, será paralizada inmediatamente, labrándose acta, secuestrándose los elementos necesarios utilizados para cometer la irregularidad quedando sujeta la situación y los responsables a todas las sanciones, multas y cargos que le correspondan.</p>
	<p>8. Notifíquese a todos los propietarios de terrenos de la villa de la Lobería de los procedimientos formales que deberán cumplir para el inicio de obras de cualquier tipo.</p>

Procedimentales	9. Dada la existencia de un Código de Ordenamiento Urbano cuyas condiciones no han sido suficientes en el pasado para evitar que la villa carezca de una orientación tendiente a ser una urbanización sostenible modelo, debería ser modificado para introducir esa visión y transferirla a normas acordes con la integración del área urbana al ANP
	10. La definición de urbanización sostenible modelo requiere de consensos técnicos y sociales que permitan diseñar los criterios y las características de un modelo singular y diferenciado de identidad y evolución particular de la villa dentro del corredor costero, como aldea de mar con servicios integrada al ANP en la que se aplican buenas prácticas para la implantación edilicia, de equipamiento e infraestructura, con la mayor eficiencia y el menor impacto.
	11. La gestión de un modelo apropiado requiere de la coordinación con múltiples entidades públicas y privadas, para poder validar en los hechos la aplicación efectiva de las competencias legales citadas más arriba, en primer lugar con el municipio de Viedma, pero por igual con los múltiples proveedores de servicios e insumos.
	12. El primer gran consenso para poder reasumir el control del desarrollo de la villa de la Lobería, es interno dentro de la autoridad de aplicación del ANP, para superar cualquier reticencia entre los agentes en intervenir en temas urbano-ambientales. Será necesario capacitar a los agentes y determinar protocolos de intervención.

3.2.14 Sanciones

Sanciones	
Normativas	1. Aplíquense a los incumplimientos de las normas establecidas en el PM y reglamentos específicos, y a los responsables de los mismos, las sanciones previstas en el régimen general de la ley 2.669 en su Título VI (Régimen Sancionatorio y Acciones Legales).
	2. Aplíquense las sanciones previstas en forma gradual, ya sea de modo acumulativo, accesorio o independiente, fundando la Autoridad de Aplicación del ANP las razones que encuentre para acumular o aplicar accesoriamente las mismas.
	3. Promuévase en los casos que se amerite por reiteración, monto e importancia del daño, el cobro judicial de los derechos, tasas, contribuciones, multas y demás deudas económicas, resarcimientos que fueran oportunamente determinados a partir de la aplicación directa de las reglamentaciones y del PM, por la vía de ejecución fiscal sirviendo de suficiente título ejecutivo la boleta de deuda expedida por la Autoridad de Aplicación

	4. Promuévase la elaboración de un código unificado de sanciones para todas las infracciones previsibles que puedan producirse según actividades dentro del ANP, para su previsión y aplicación por parte de los agentes de la autoridad del ANP.
	5. Establécese que las infracciones que comportan sanción sobre una acción persistente y continua tal como la modificación inaceptable de los ambientes naturales o la instalación de edificaciones sin autorización -entre otros casos potenciales- serán establecidas mediante multas asociadas a unidades temporales (mes, día, año), cuyo plazo y monto total se acumulará hasta tanto culmine plenamente la acción que las origina eliminando las causas que motivaron el daño.
	6. Establécese que independientemente de las sanciones previstas en el art. 35 de la ley 2.669, en aplicación de lo previsto en el art. 39 de la misma norma, cuando amerite en función de la dimensión de la afectación al patrimonio, valores y objetivos del PM se procederá a realizar: <ul style="list-style-type: none"> a) El cálculo del daño producido y la intimación a su pago. b) La recomposición del ambiente a efectos de la reposición de las cosas al estado anterior al evento que da origen a la sanción. c) Todo otro cálculo de costos que puedan haber motivado las conductas indebidas y la exigencia de su pago
	7. Hágase saber a los residentes y visitantes, que en resguardo de la integridad y objetivos del ANP, que las conductas antirreglamentarias y/o delictivas reiteradas serán sancionadas con la pérdida del derecho a solicitar cualquier nueva habilitación, en los plazos previstos por el artículo 35 de la ley 2669.
Procedimentales	8. Dada la complejidad que adquiere el seguimiento de acciones dentro de un ambiente urbano, que se agregan a las demás del ANP, se debería desarrollar un sistema electrónico de registro y seguimiento de las infracciones y de sus actuaciones, y de los antecedentes acumulados.
	9. Según se ha observado, los agentes públicos de la autoridad de aplicación del ANP precisan una mayor capacitación y disponer de protocolos para sus procedimientos que les brinden seguridades para poder operar un régimen de control urbano-ambiental dentro del ANP

3.2.15 Para la seguridad de las personas

Para la seguridad de las personas	
Normativas	1. Téngase en cuenta que las actividades en el ANP deben desarrollarse conforme las normas y sistemas de emergencia que rijan en la administración provincial en el marco de la Ley nacional N° 27.287 (de creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección civil), de la Ley

	<p>provincial N° 5.242 que adhiere a la anterior, de la Ley provincial N° 3.065 (creación del Sistema Provincial de Prevención de Accidentes), de la Ley provincial N° 5.333 (creación del organismo de Protección Civil) y de la ley S-1.311 (Defensa Civil), y otras normas complementarias.</p> <p>2. Procédase a identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos significativos emergentes (ver Natenzon y Ríos, 2015) en el ANP, y a establecer las hipótesis y protocolos de acción correspondientes a los eventos, siniestros y catástrofes que pudieran suceder dentro del ANP, considerando y sopesando las siguientes: a) desmoronamientos de los acantilados, b) incendios, c) ahogamientos, d) aproximación indebida a mamíferos marinos y conductas de la fauna, e) mordeduras de víboras, f) lesiones humanas en las restingas y rocas, g) conductas agresivas de visitantes, h) accidentes viales, i) incendios de la vegetación, j) incendios de edificaciones, k) derrames de combustibles y contaminantes, l) naufragios, ll) otros (la lista anterior no agota las causas de riesgo).</p> <p>3. Adviértase a los visitantes y moradores del ANP sobre la existencia de riesgos, con énfasis particular en los más notorios y a través de múltiples modos de transmisión. La señalización fija informativa es fundamental, debe ser completa y presentarse en todos los puntos de acceso, aunque no debe ser la única modalidad a la que se apele para disuadir las conductas inseguras. Sobre las áreas con riesgo significativo debe lograrse una advertencia que no ofrezca dudas.</p>
Procedimentales	<p>4. Para construir una cultura de seguridad será conveniente una capacitación intensiva y una amplia participación de los agentes públicos en el proceso de protocolización. Se advierte a priori cierto grado de naturalización de importantes amenazas que se manifiestan habitualmente dentro del ANP.</p> <p>5. Dado que los riesgos, vulnerabilidades y consecuencias involucran la intervención de distintos organismos públicos, los protocolos deberán ser elaborados en coordinación con otras áreas del estado municipal, provincial y nacional, e integrando eventualmente a particulares que puedan facilitar recursos apropiados.</p>